

N.º 418
1 de octubre de
2026
Apoyo:
1,5 € - 2 €

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

REDACCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN:
C/ Desengaño 12, 1º3-A
28004 Madrid
TEL: 91 522 23 56
io@informacionobrero.org
www.informacionobrero.org

EDITORIAL

La situación de la clase trabajadora exige subir salarios y pensiones y bloquear los precios

Como un azote sobre la mayoría de la población que vive de un salario o una pensión ha caído el anuncio de la subida de la inflación en agosto: 4'3% de aumento; cuando los salarios de convenio, el SMI y las pensiones no llegan o apenas superan el 3%. Subidas brutales en combustibles, energía, transporte y alimentos; cuando ya la tercera parte de la población no llegaba a fin de mes. Y septiembre se anuncia peor.

No valen excusas. Por encima de la guerra o las catástrofes «naturales», es una decisión consciente del capital, de los grandes monopolios, el aumentar sus beneficios aplastando a la población, llevándola a una situación en que la principal preocupación sea como subsistir. Y recordemos que el IPC oficial no registra el aumento exponencial de la vivienda que provoca 500 expulsiones por día.

¿Quién es responsable? Sin duda, el capital y el «libre mercado». Libre para quienes especulan con la vivienda, el petróleo, los alimentos.

¿Quién es también responsable? Los que gobiernan y permiten, sin hacer nada, que esto continúe así. El drama del desahucio de Maricarmen ha multiplicado los esfuerzos para buscar medidas. Pero las que se anuncian, tanto para la vivienda como para los combustibles, son paliativas.

Ninguna medida de fondo se puede llevar a cabo sin atacar los privilegios del capital, la gran banca, las energéticas, los monopolios de distribución.

Si el Gobierno quiere defender a la población trabajadora, su base social y electoral, tiene que actuar de inmediato, y no con parches. Tiene que bloquear los precios de combustibles y artículos de primera necesidad, expropiar a los fondos buitres. Estas son las exigencias de los electores de Berlín, como lo fueron en Nueva York. Y aquí.

Aquí se inscribe la responsabilidad del movimiento obrero, de los sindicatos, cuya función es defender el poder de compra de salarios y pensiones (como acaban de recordar los trabajadores de Airbus).

Ningún decreto será posible o tendrá efecto sin la movilización masiva para detener la oposición de la reacción, de los franquistas de las instituciones del Estado, perros de presa de la gran propiedad.

Esta es la tarea del momento. Y se combina con la lucha contra la política de guerra, porque guerra militar y guerra social van de la mano.

Solo hay una salida: expropiar a los fondos buitres



Masivas manifestaciones contra los desahucios al grito "o caen los rentistas o cae el gobierno"

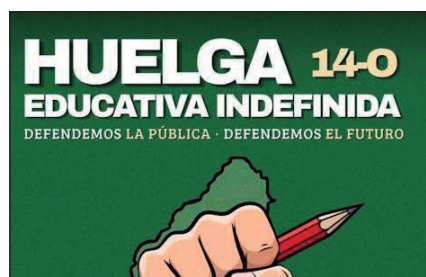
Airbus: La importancia de recuperar el IPC real

Página 3



Madrid: Huelga de enseñanza 14 octubre

Página 4



La realidad social de Ceuta

Página 9



Campaña en defensa del derecho de asilo a los desertores ucranianos y rusos

Página 7



El derecho a migrar



La migración es un derecho inherente a las personas. La humanidad, desde sus inicios, ha recorrido el planeta buscando lugares donde poder encontrar un mejor hábitat, más y mejores recursos y disponer de una mejora en su existencia. Migraban en busca de alimento, habitabilidad y estabilidad. Pan, vivienda y paz.

Con la revolución Industrial y el surgimiento de la clase trabajadora, la migración ha sido utilizada como un elemento de división entre los trabajadores, siempre en beneficio de los empresarios y del capital.

«No cabe duda de que la pobreza extrema obliga a las personas a abandonar su tierra natal y que los capitalistas explotan a los trabajadores inmigrantes de la manera más descarada. Pero solo los reaccionarios pueden cerrar los ojos ante la significación progresista de esta migración moderna de naciones». (Lenin: Capitalismo y emigración)

La migración no es un acontecimiento nuevo, como tampoco lo es la defensa de los «valores patrios» por los sectores más atrasados, guiados por las aristocracias, que ven cómo su opulencia y riqueza alcanzada van siendo absorbidas por el capital financiero. Recientemente hemos tenido el mejor ejemplo de sus valores: el valor de sus yates y cervezas en mano ha acudido a Ceuta a agitar con sus banderas en su propio beneficio.

Los empresarios, así como la Iglesia católica, juegan a todas las bandas, mientras alimentan organizaciones que atacan a los migrantes; los reclaman, sea para explotarlos y garantizar sus beneficios como para mante-

ner su apostolado. Ese doble rasero también es usado por ciertos gobernantes.

El derecho a migrar va más lejos de lo que se manifiesta incluso por sectores obreros —que buscan un argumento ante su falta de comprensión sobre el papel que juega la migración en la lucha de clase—, al afirmar que son bienvenidos porque son los que en el futuro garantizarán nuestras pensiones, o porque van a cuidar a nuestros abuelos, o porque realizan otros trabajos que muchos no quieren hacer. Esos no son nuestros argumentos.

La clase trabajadora es única y tiene los mismos intereses con independencia de dónde se encuentre, porque nuestro enemigo es común. El derecho a migrar lo es sin condiciones ni requisitos y sin tope alguno. Es nuestro deber acogerlos e incorporarlos a nuestra causa, rechazando cualquier tipo de guetos, utilizados como refugio ante la presión que puedan recibir, o de los denominados cupos para extranjeros que se realizan en ciertas listas electorales, aludiendo a una discriminación positiva. Su participación debe ser plena en nuestros sindicatos; deben ser, si fuera necesario, acompañados a las movilizaciones, porque sus necesidades son las nuestras y las nuestras son las suyas.

Por eso nuestra tarea pasa por exigir a nuestro Gobierno la eliminación de cualquier restricción a la llegada de migrantes y eso pasa por la derogación de la Ley de Extranjería. Celebremos los avances en las regulaciones, fruto de las movilizaciones, pero no nos limitamos a ellas.

Miguel González

Un gobierno belicista

Este mes de septiembre, el Ministerio de Defensa ha anunciado 14 PEM (Programas Especiales de Modernización de «defensa») con un coste de 32.000 millones.

Se pretende con ello mantener el gasto militar por encima del 2 % del PIB y cumplir los compromisos con la OTAN. Estos 32.000 millones se sumarían a los 31 PEM aprobados el año pasado por un valor aproximado de 34.000 millones.

Estos programas de modernización se enmarcan en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y Europa aprobado por el Gobierno en marzo de 2025, que tuvo como consecuencia inmediata la inyección extraordinaria de 10.471 millones de euros para pasar del 1,4 % del PIB al 2 % en gasto militar



en 2025. Pedro Sánchez afirmó ufano que esto se haría «sin subir impuestos, sin tocar un céntimo la inversión en el Estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público».

Si eso es así, no sabemos por qué no invirtió ese dinero en la mejora de la enseñanza pública, por poner un ejemplo de los que le están estallando en la cara a su gobierno.

Esta es una cuestión política clave, a la que podemos responder que el gobierno «progresista» pone las exigencias de Trump y de la OTAN por delante de los intereses y reivindicaciones de trabajadores y pueblos. De hecho, el gobierno no se cansa de afirmar el «compromiso de España con la OTAN, de la que quiere ser un miembro central y fiable».

Para justificar el pozo sin fondo del gasto militar, nos dicen que la «in-

versión en seguridad y defensa» creará decenas de miles de puestos de trabajo e impulsará el crecimiento de la industria más avanzada.

Lo cierto es que quienes se benefician de los contratos son empresas como Indra, Airbus o Navantia, que alcanzan récords en beneficios y recortan salarios y derechos a sus trabajadores (ver en página 3 el caso de Airbus).

Las empresas a las que se les adjudican los PEM son financiadas por el Ministerio de Industria y Turismo; además, el Gobierno se compromete a colaborar en fusiones y uniones temporales de estas empresas, es decir, en sus reestructuraciones, sinónimo de despidos.

¿En qué nos beneficia a los ciudadanos la producción de aviones Eurofighter, de fragatas y misiles? Estas decenas de miles de millones podrían ser destinadas a la mejora de los servicios públicos, de las pensiones o a la producción de materiales y productos útiles a la población, y no para la destrucción y la guerra.

¿En qué se usa todo ese armamento? Este mes de septiembre, con la situación existente en Ceuta, el Gobierno ha realizado dos ejercicios militares en la costa andaluza y el mar de Alborán. Le enseñan los dientes a Marruecos.

Margarita Robles informó en julio de la participación de un contingente militar español en el marco de las «operaciones de la OTAN en Turquía e Irak, donde se reafirma el compromiso de España con la protección del flanco este y Oriente Medio.

Una misión muy importante, tanto por lo que implica como por lo que tiene de simbólico, que es el compromiso de España en un lugar muy difícil en el ámbito de la defensa anti-aérea —dijo: Esta «misión» (*Nato Mission Irak*), en la que participan también medios turcos y estadounidenses, se ha reorganizado tras el inicio de la guerra de EE. UU. contra Irán y, según Margarita Robles, «España seguirá manteniendo el apoyo operativo a esta misión».

A pesar de los gestos, se trata de un gobierno belicista, implicado en las guerras de los EE. UU. y la UE a través de su subordinación y dependencia de la OTAN.

Y esto cuando más del 70 % de la población del Estado español se opone a la guerra y al rearme.

Blas Ortega

Alicante

Mazón a prisión, Consell dimisión

Quinientas personas se concentraron el sábado 26 frente a la Casa de las Brujas, sede de la Generalitat en Alicante. Era la primera vez que las asociaciones de víctimas, los CLER, el ASV y las organizaciones que apoyan sus reivindicaciones trasladaban la protesta a Alicante.

En los discursos se exigió el fin del aforamiento de Mazón, principal responsable de los 233 asesinatos del 29 de octubre de 2024, y la dimisión del Consell de Juanfran.

La impunidad de la que disfruta Mazón gracias a la defensa que de él hacen la Generalitat y el aparato de Estado judicial (los tribunales franquistas) concentra la indignación del pueblo valenciano, indignación que aflorará con fuerza el próximo 29 de octubre, cuando se cumplen los dos años de la dana. Rabia e indignación crecientes después de su negativa a responder a ninguna pregunta en su segunda comparecencia en el Parlamento.

Corresponsal



En defensa del derecho efectivo a la protección de la infancia



Hasta hace unos meses, la idea de proteger de forma reforzada los derechos de la infancia y el interés superior del menor parecía algo asumido, al menos formalmente, en las «democracias» occidentales. Sin embargo, hoy ese derecho elemental es cuestionado abiertamente, tanto en las declaraciones como en los hechos, es un paso más en una escalada desenfundada hacia la barbarie.

Tras casi dos meses continúan entre 700 y 1.000 niños y niñas en las calles de Ceuta según cálculos del Gobierno. Otros 2.048 están hacinados en centros de menores improvisa-

dos y otros 300 se encuentran en campamentos para adultos por falta de plazas.

En la última semana varias adolescentes abandonaron los centros de menores de la ciudad autónoma denunciando castigos físicos, falta de atención médica, amenazas y malos tratos por parte de trabajadores. Cientos de niños, niñas y adolescentes se encuentran en las calles, carecen de acceso adecuado a alimentación, agua potable, alojamiento y atención médica. Además son objeto de persecuciones, robos, humillaciones y palizas. El diario.es ha verificado varios vídeos

de agresiones de militares uniformados a inmigrantes, incluidos menores. El Gobierno mira para otro lado y se muestra incapaz de detener estos abusos.

Tanto dirigentes del PP como de VOX claman por la repatriación de los menores negándose a asumir el mandato legal que las CCAA tienen de proteger a estos niños y niñas. El portavoz comunitario de Asuntos Internos de la UE, Markus Lammert, defendía el pasado 18 de agosto que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que «todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados». En relación a los menores señala que la expulsión «está regulada por el Derecho de la UE». Ha apuntado que la Directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, «incluidos los menores no acompañados».

Lo cierto es que unos y otros saben que eso es no es posible, como finalmente tuvo que reconocer a regañadientes el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Ante la devolución de niños y niñas desde Ceuta a Marruecos llevado a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021, el Tribunal

Superior de Justicia de Andalucía declaró en julio de 2022 que «la actuación de la Administración, exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, concurrió una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores». En enero de 2024 el Tribunal Supremo confirmó que la devolución de niños y niñas desde Ceuta a Marruecos fue ilegal.

Ahora las Comunidades Autónomas se niegan a asumir su responsabilidad de proteger a estos menores afirmando que no disponen de plazas suficientes. El Gobierno, por su parte, no se muestra capaz de desbloquear la situación.

En el año 2026, según los datos oficiales del Ministerio de Juventud e Infancia, hay 19.977 menores tutelados que viven en centros residenciales en España. En el año 2018 eran 21.283 y, en el 2019, 23.209.

La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha afirmado que «los recursos de acogida de menores no acompañados en Madrid están al límite». Sin embargo, los mismos datos permiten cuestionar esta afirmación: en el año 2026 hay 1.858 niños y niñas en acogimiento residen-

cial en Madrid, mientras que en diciembre de 2021 había aproximadamente 2.400. A esto hay que añadir que el Real Decreto 556/2026 establece que la Comunidad de Madrid debería garantizar una capacidad ordinaria de 2.471 menores extranjeros no acompañados, mientras que actualmente atiende a menos de 800. La Generalitat Valenciana afirma que está al 160% de su capacidad, después de haber cerrado recursos, la realidad es que atienden a 200 menores menos que en el 2018.

No estamos ante un problema de falta de plazas sino ante la voluntad política de bloquear la situación. Pero existe la obligación legal y la responsabilidad pública de proteger a estos niños y niñas. El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y de hacer posibles estos traslados sin más demoras.

Son menores y, como tales, tienen derechos que todas las administraciones públicas están obligadas a garantizar. Hoy más que nunca es necesario defender la protección a la infancia como un derecho básico e irrenunciable.

Luis Arias

8.000 trabajadores de AIRBUS en Madrid se manifiestan frente al Ministerio de Industria para exigir respeto a sus reivindicaciones y al derecho de huelga



El 30 de septiembre y el 1 de octubre la empresa ha convocado un nuevo referéndum para que la plantilla de las 6 factorías de Airbus en España valore si acepta o no la propuesta de acuerdo que presentó la compañía en el Ministerio de Industria el 4 de septiembre. El viernes 25 de septiembre la empresa ha tenido que sacar un comunicado haciendo aclaraciones sobre la citada propuesta, especificando cuestiones salariales importantes como el carácter retroactivo y otras matizaciones importantes. Gran parte de la plantilla que ha realizado la huelga mostraba su rechazo por no conocer realmente los detalles del acuerdo y por no haber tenido posibilidad de participar en una auténtica negociación a través de sus representantes. Se mantiene y existe una enorme desconfianza por muchos trabajadores hacia la dirección, a la que exigen garantías sobre el acuerdo, incluso sobre si debía haberse continuado con los piquetes de huelga o si aún es posible conseguir otras mejoras.

La empresa se ha visto obligada a comunicar a la plantilla ciertas cuestiones importantes para intentar asegurar un resultado positivo en el referéndum. Hasta el momento, la mayoría de los trabajadores en huelga han rechazado varias propuestas de acuerdo anteriores que no iban tan lejos y no aclaraban algunos de los avances que ahora aparecen, después de una huelga de 35 días.

Es importante recordar que, a pesar de que esta era una negociación que quedó pendiente en el actual convenio firmado en 2024, con una duración de 4 años, y que solo tenía que tratar la subida salarial de 2026 y 2027, los trabajadores en huelga han impuesto a la empresa que se hable de otros temas como teletrabajo, vacaciones, absentismo, comedor, situación del personal de la división espacial que segregan a otra nueva empresa, etc.

La importancia de recuperar el IPC real más un 7,95% en 4 años a cuenta de todo lo perdido.

Desde la pandemia, la actualización salarial en AIRBUS no ha estado referenciada al IPC, sino que contaba con una mera cifra de incremento acordada previamente al margen de la inflación. Es decir, mientras en 2021 y 2022, cuando la inflación final reconocida por el INE de esos dos años ascendió a un 12,2%, la subida que se aplicó a los trabajadores de Airbus apenas sumó un 3%: un 1,5% cada año. En 2021 subió el IPC un 6,5% y en 2022 un 5,7%.

En dos años, a nivel de actualización salarial de aplicación general para toda la plantilla, se puede decir que perdió un 9,2% de poder adquisitivo;

sin contar otras posibles subidas que solo afectan a parte de la plantilla. Un golpe brutal a la capacidad adquisitiva de los salarios en apenas dos años. Todo ello a pesar del incremento de beneficios de AIRBUS, que solo en 2025 ascendió a más de 5200 millones, o del aumento salarial del máximo ejecutivo, un 27% el último año.

Comparados con empresas de la industria que sí conservan la actualización salarial anual con IPC real más un incremento adicional, consolidado en tablas; solamente esos dos años se produce una diferencia que se acrecienta porque unos pierden un 9,2% y otros aumentan un 10% de salario.

Manifestación espectacular frente al Ministerio de Industria.

El sábado 12 de septiembre en Madrid, unos 8.000 trabajadores de AIRBUS se manifestaron hasta el Ministerio de Industria para exigir respeto a sus reivindicaciones y al derecho de huelga. Fue una tremenda demostración de fuerza de una plantilla movilizada en la que participaron, además de trabajadores de Madrid, otros de las plantas de Andalucía y Castilla-La Mancha.

El 9 de septiembre, el comité de huelga (CGT, UGT y UTIL) decidió "pausar" la huelga, es decir, mantener la convocatoria formal, pero dejar de hacer de momento los piquetes, tras la oferta realizada en el Ministerio de Industria por el Gobierno y el CEO de la multinacional, Guillaume Faury.

Hay que recordar que en la reunión convocada en el Ministerio de Industria el 4 de septiembre, la dirección de la multinacional negó la entrada formal (a pesar de haber sido convocados) a CGT y UTIL, dos de los tres sindicatos que forman el comité de huelga, en un espectáculo bochornoso y una pretenciosa puesta en escena que consintieron los representantes del gobierno presentes.

Existe una situación llamativa. A esa reunión sí asistieron representantes de CCOO, ATP y SIPA, los cuales, sin exigir a la dirección que debían participar todos los sindicatos convocantes de la huelga (como debería haber ocurrido solo por responsabilidad y respeto a los trabajadores en huelga), aceptaron la propuesta rápidamente, al igual que en ocasiones anteriores otras ofertas inferiores.

Esos sindicatos, que son mayoría en el comité interempresas, con un 75% de representación según las últimas elecciones sindicales, no apoyaron ni convocaron la huelga actual, en la que ha participado una parte importantísima de la plantilla, tanto de oficinas como de taller.

Sin embargo, de los tres sindicatos que forman parte del comité de huelga, tan solo UGT pudo asistir a la reunión en el Ministerio de Industria. Los tres sindicatos que apoyan la huelga apenas suman un 25% de la representación.

La empresa será juzgada por vulnerar el derecho de huelga el 4 de noviembre.

CGT denunció en la Audiencia Nacional a la dirección de Airbus por vulnerar el derecho fundamental a la huelga y a la libertad sindical en la negociación de este preacuerdo. Pidió medidas cautelares para suspender el referéndum sobre la propuesta presentada en el Ministerio de Industria, que la empresa iba a realizar los días 24 y 25 de septiembre.

La Audiencia Nacional paralizó cautelarmente esa votación y autorizó la celebración del referéndum a la empresa, que ha anunciado una nueva convocatoria para el 30 de septiembre y 1 de octubre.

Aun así, la Audiencia Nacional tendrá una nueva vista el 4 de noviembre donde tendrá que analizar la cuestión de fondo planteada en la demanda de

do momento del diálogo con los representantes de la asamblea de trabajadores huelguistas. Estrategia en la que han colaborado la dirección de los sindicatos CCOO, SIPA y ATP, mayoría en el comité interempresas.

La irrupción de la plantilla en una huelga no prevista dominada por la asamblea

A pesar de todo, hay que reconocer y poner en valor que la dirección de la empresa ha tenido que ir muchísimo más lejos de lo que habría querido admitir hace meses. Jamás habría pensado que se iba a desatar una huelga indefinida que durara 35 días y pusiera en cuestión el cumplimiento de las entregas de más de la mitad de los pedidos de aviones de este año, que sometiera a los sindicatos al control de las asambleas y que se celebraran grandes manifestaciones en Getafe, Sevilla y Madrid.

En un momento además en el que existe un aumento importante de los pedidos militares por varios países, la dirección de Airbus debe estar recibiendo presiones de varios gobiernos para que no se cuestionen las entregas de

unieran a la mayor parte de la plantilla, muy determinada a conseguir, entre otras cuestiones, la recuperación del IPC real, o que fuera a durar tanto y que estuviera dirigida por una asamblea general que durante unos días consiguió que todos los sindicatos tuvieran que participar y que toda la plantilla, también los operarios de taller, estuviera llamada a participar en la huelga y en la manifestación del 16 de julio, que fue muy importante, de Getafe y en Sevilla.

Porque una de las características que explican esta situación es la negativa histórica de varios sindicatos a evitar participar en asambleas generales, donde todas las secciones sindicales puedan dar su punto de vista, rindan cuentas y se sometan a sus votaciones.

Ha sido muy significativo cómo, especialmente en la fábrica de Getafe, la más grande de AIRBUS en España, la huelga ha sobrepasado a todos los sindicatos, y ha estado controlada por la asamblea de personas trabajadoras en huelga que organizaba grupos de organización de los piquetes.

Nos mantenemos a la espera de cuáles son los siguientes pasos, de la continui-



Votación en la asamblea de Airbus en Getafe.

CGT sobre si la empresa ha vulnerado el derecho de huelga y ha tenido mala fe negociadora en la presentación del actual preacuerdo y en las mediaciones paralelas que mantuvo en el SIMA, negándose a negociar con los convocantes y el comité de huelga.

¿Qué debería haber ocurrido? La empresa debería haberse sentado con el comité de huelga para negociar y, en su caso, redactar claramente los términos de una propuesta que incluyera las peticiones de las personas trabajadoras en huelga, que son las que deberían haber valorado si dicha propuesta servía para desconvocar o no definitivamente la huelga y pasar a consulta posteriormente al resto de la plantilla para decidir si se firma o no un acuerdo.

En el convenio anterior, en lugar de celebrar un referéndum entre toda la plantilla acerca de las propuestas de acuerdo de convenio, los sindicatos firmantes CCOO y ATP, con una mínima mayoría en la representación de la comisión negociadora, firmaron el acuerdo del convenio, consultando tan solo a su afiliación, sin preguntar al resto de la plantilla. Se dio el caso de que tan solo una minoría de la plantilla pudo decidir acerca de la firma o no del convenio.

La realidad ahora es que la empresa ha hecho todo lo posible por evitar negociar directamente con el comité de huelga y ha despreciado y huido en to-

pedidos comprometidos. En ningún momento, hace meses, se podía pensar que la empresa iba a tener que poner encima de la mesa el IPC real con garantías y la recuperación de una parte del poder adquisitivo perdido, que en este momento ascendería a cerca de un 8,20%, con el efecto arrastre repartido en cuatro años.

El hartazgo de buena parte de la plantilla hacia los manejos de la dirección y el conocido conchabero que hacen con algunos dirigentes sindicales, sin duda ha sido el combustible de que se fuera gestando un movimiento interno, sobre todo entre los empleados de la oficina, para plantar cara y presionar para que se convocara una movilización, que tuvo que convocar finalmente SIPA, sindicato más votado en Getafe y que al final de julio se desligó de la misma firmando un preacuerdo con CCOO y ATP sin consultar a la asamblea y que fue rechazado por la mayoría de la plantilla.

No era fácil pensar que la convocatoria de una huelga indefinida que empezó el 1 de julio fuera continuada durante casi tres meses, y que, aunque inicialmente parecía que estaba muy influida por la retirada por parte de la empresa de los dos días de teletrabajo a la semana, que afectaba a los trabajadores de oficinas, se pudiera extender y estuviera finalmente dominada por la defensa de reivindicaciones que

dad o no de las movilizaciones, de qué se acuerda en las asambleas y del resultado del referéndum que no conoceremos hasta el 2 de octubre, así como del juicio del 4 de noviembre.

La negociación de la subida salarial de los dos últimos años del actual convenio parecía que RRHH la tenía bien atada. Sin embargo, la constancia de buena parte de la plantilla ha sido determinante para hacer cambiar el rumbo en pleno vuelo a la dirección de la compañía. La capacidad de mantener la presión de la huelga durante semanas ha sido clave para influir en el resultado de la negociación y hacer ver a la empresa que su plan no era suficiente sin contar con los trabajadores.

Desde Información Obrera vamos a realizar próximamente un debate con varias personas trabajadoras de Airbus para poner en común sus experiencias en esta movilización, hacer balance de esta huelga, intercambiar sus puntos de vista y poder editar posteriormente un resumen de sus conclusiones que, por su interés, pueda servir al movimiento obrero de todo el país y que sea también de utilidad, por ejemplo, a los mismos trabajadores y sindicalistas de la compañía en otros países.

Carmen García y José Esteban

Las educadoras de 0-3 luchan por sus derechos

Defender a las educadoras de 0-3 años es defender los derechos de la clase trabajadora y el derecho de la infancia a una educación pública, digna y de calidad.

Entrevista a Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Educadoras Infantiles y delegada sindical en CGT.



P. ¿Cómo nace el manifiesto que habéis hecho y que queréis poner encima de la mesa?

R. Arrancamos hace tres años, cuando nuestro convenio colectivo llevaba parado dos años. Conseguimos una subida salarial de 16 euros, pero cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional, nuestro salario se quedó por debajo.

Empezamos con las reivindicaciones. No solo las condiciones salariales, también la bajada de ratios y la pareja educativa, herramientas necesarias para dar una educación de calidad.

P. Se habla de conciliación familiar, vosotras insistís que es educación. ¿Por qué?

R. Claro, conciliar puedes hacerlo metiendo a 20 criaturas en una clase, y lo único que haces es vigilar, pero eso no es educación. Educar requiere observar, atender, dar individualidad y resolver conflictos. Cuando trabajas con menos criaturas puedes hacer una educación de calidad.

P. ¿Cuándo os dais cuenta que esto se puede hacer bien?

R. Muchas de nosotras hemos trabajado en el Ayuntamiento de Madrid y nos tocó la legislatura de Manuela Carmena, que impuso unas condiciones que eran la pareja educativa y unas ratios más afables.

P. ¿Qué condiciones laborales tenéis, en salario, jornada y reconocimiento profesional?

R. Trabajamos 38 horas semanales y empezamos el curso debiendo días. En la gestión indirecta, nuestro calendario laboral no tiene nada que ver con el escolar. Tenemos 30 días de vacaciones y 10 días que llaman de asuntos propios, pero corresponden al cierre de la escuela. Por eso debemos días, que después recuperamos, haciendo horas en casa para rellenar informes.

En gestión indirecta y privada, el convenio marca el salario mínimo. En la gestión directa, los salarios son más altos, y tienen reconocidas horas no lectivas. A esas condiciones aspiramos.

P. ¿Qué diferencia hay en el reconocimiento profesional?

R. Las condiciones laborales ya marcan una diferencia: no es lo mismo ganar 1700 euros que el salario mínimo. Además, en la privada concertada o gestión indirecta, somos consideradas docentes, mientras que en la gestión directa somos personal laboral, no docente. En los CEIP no podemos asistir a los claustros. Por eso la lucha es de todas.

P. ¿Reclamáis escuelas infantiles, públicas, accesibles y de calidad?

R. Sí. Cada año, entre 10.000 y 11.000 familias se quedan fuera de la red de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Queremos que se construyan escuelas públicas, y que ninguna familia tenga que hacer malabares para conseguir plaza. Mientras tanto, se destinan recursos públicos a la privada. También queremos que se apoye a las pequeñas cooperativas de educadoras con buenos proyectos.

P. ¿Es un sector muy feminizado?

R. Sí, un 97,4% somos mujeres. Es un sector dedicado a los cuidados, pero cuidamos educando: son cuidados profesionalizados.

Si esta profesión fuera de hombres, seguramente no cobraríamos el salario mínimo. Es una lucha feminista y de la mujer trabajadora. Tenemos que dignificar las profesiones feminizadas.

P. Desde el marco sindical, ¿Qué dificultades encontráis las trabajadoras para organizaros?

R. La organización sindical es fundamental para la clase trabajadora. Cuando arrancamos la huelga nos organizamos por distritos y barrios, y fue muy positivo. Pero existe la reticencia a la afiliación. Si queremos estar en las mesas de negociación y defender nuestros derechos tenemos que organizarnos. Hemos tenido reuniones con CCOO, UGT y otros sindicatos, pero lo que nos hace avanzar es la unión de las trabajadoras.

Hay una generación joven de trabajadoras que no ve el sindicalismo como la mejor herramienta de lucha.

P. ¿Con quién os habéis reunido además de los sindicatos?

R. Nos hemos reunido con Pedro Sánchez, estuvimos en la Moncloa. Hablamos del trabajo con el Ministerio para modificar el Real Decreto, que debe reconocer el 0-3 como una etapa educativa esencial. Es necesario que salga en diciembre y se cumpla.

P. Que buen final para preguntarte ¿Y si no sale?

R. Seguiremos con la huelga adelante. Hemos dado un paso importante con la bajada de ratios: todas las escuelas infantiles, también las privadas, tendrán que cumplirlas.

Hasta conseguir condiciones laborales dignas: salarios justos, ratios adecuadas, y reconocimiento real de las educadoras. Basta ya de externalizaciones y privatizaciones que degradan la calidad.

La infancia no puede esperar

Alba, Marisa y Ana

Contra los ataques del gobierno regional 27 de septiembre, masiva manifestación en Madrid por la enseñanza pública



Decenas y decenas de miles de participantes. Hasta 100.000 de acuerdo con las cifras oficiales de las organizaciones convocantes, 20.000 según la delegación del gobierno. En todo caso, resulta innegable que una marea verde de decenas de miles de personas se movilizó desde la Glorieta de Atocha a la Puerta del Sol.

- Menos horas lectivas para educar mejor
17 horas en Secundaria y 22 en Primaria.
- Bajada de ratios
Menos alumnado por aula para mejorar la atención educativa.
- Refuerzo real de la atención a la diversidad
Más orientación, PT, AL, PSC y recursos especializados.
- Lucha contra la segregación escolar
Más equidad y recursos para los centros de especial complejidad.
- Menos burocracia y más personal administrativo
Más tiempo para educar y menos para tareas administrativas.
- Salarios dignos
Subida salarial de 600 € mensuales.
- Impulso y mejora de la Formación Profesional
Recursos, regulación y condiciones adecuadas para su desarrollo.
- Inversión real en infraestructuras educativas
Centros climatizados, accesibles y con mantenimiento adecuado.

24 de junio, en la que se decidió la formación de un Comité de Huelga Mixto, conformado de manera inédita por las organizaciones CCOO, Queremos FP, CNT, CGT, Menos Lectivas, Solidaridad Obrera, STEM, UGT y Educación Especial Digna.

Mientras tanto, en la universidad, afectada asimismo por los ataques del gobierno regional y la inacción del gobierno central, se debate su incorporación a la huelga. El pasado jueves día 24, en la asamblea general de la Universidad Complutense, se acordó apoyar la convocatoria de huelga para el mismo día 14 de octubre. Esta decisión debe ser refrendada por la coordinadora interuniversitaria.

En el final de la manifestación, en Sol, se produjo la confluencia con la acampada por el derecho a la vivienda. Esta acampada se instaló la víspera, tras la asimismo masiva manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, con el lema "Ni una Maricarmen más, señalemos a los

responsables" (alusiva al brutal desahucio la víspera de Maricarmen Abascal, vecina de 87 años del barrio del Retiro, tras más de siete décadas residiendo en ella).

responsables" (alusiva al brutal desahucio la víspera de Maricarmen Abascal, vecina de 87 años del barrio del Retiro, tras más de siete décadas residiendo en ella).

Estas movilizaciones refrendan una constatación, elemental pero de enorme importancia: ninguna duda puede lanzarse sobre la voluntad de movilización de la clase trabajadora y específicamente de su segmento juvenil. Frente a las propagandísticas de la reaccionaria profecía autocumplida del "no hay ambiente de huelga", la afluencia masiva y las consignas coreadas (como "¡Y a las privadas, nada, nada, nada!") revelan dicha voluntad, formando parte del imprescindible proceso preparatorio de la huelga.

Un proceso concentrado en particular en la celebración de asambleas de centro, pero también en la movilización del conjunto de la clase trabajadora con comités de apoyo en fábricas, barrios, etc.

El Gobierno regional es mucho más débil de lo que se le atribuye habitualmente. Así se verificó con la anulación de la visita de Ayuso a la inauguración del curso académico en la Universidad Autónoma el pasado día 16. Dicha anulación se produjo ante la protesta estudiantil y sindical organizada bajo el lema "Ayuso, fuera de la universidad". ¡Claro que se le puede derrotar al gobierno tan reaccionario! La movilización no puede ser testimonial. Se convoca huelga general, indefinida, ante la gravedad de la agresión. Para ganar las reivindicaciones, como sin duda se logrará si la clase trabajadora, de la enseñanza pública y en general, despliega toda su indudable capacidad movilizadora.

X.A.M.

Valencia

Entrevistamos a Asier Cuesta, coordinador general de la AEPP-PV y activista cultural



IO. - ¿Qué es la AEPP?

Asier. - L'Aliança d'Estudiants per l'Educació Pública es un grupo de alumnos indignados con el panorama social y político actual, especialmente con todo el que rodea la educación y la cultura de nuestro País Valenciano. Tenemos como objetivo ser un espacio de debate, formación de la juventud y lucha en pos de un sistema educativo que no solo sea un sistema y sea también educativo.

IO. ¿Cómo y por qué la constituisteis?

A.- Nacimos en el punto más álgido de la revuelta educativa del curso 2025 - 2026, en la acampada docente donde, frustrados por la carencia de representación estudiantil por parte de las organizaciones que, en diversas ocasiones, acaban enterrando los intereses de la

comunidad educativa debajo de los intereses partidistas. Nos unimos con la voluntad de crear una red estudiantil que participe en la construcción del modelo de escuela que queremos, donde el alumno no sea un simple receptor de decisiones y contenidos sino un factor clave para una educación democrática.

IO. - ¿Qué valoración hacéis de la manifestación del 12 de septiembre?

A.- Fue una clara demostración de la persistencia de la comunidad educativa de nuestro país que, después de un final de curso en las calles diariamente, no ha dudado en volverlas a conquistar de verde. Y el curso que viene va a estar marcado de nuevo por este verde.

Aparte de que será un otoño y posiblemente un invierno en el que ocurrirán acontecimientos que marcarán la historia del activismo juvenil y el sindicalismo estudiantil, porque nos encontramos al borde del colapso social de todo el panorama global. Estamos presenciando reclutamientos forzosos de la juventud en Europa, los gobernantes nos abandonan ante las catástrofes, hunden la educación pública con cada decreto y cada reforma educativa, asesinan a estudiantes en Palestina, desahucian familias y mientras tanto la casta política se echan la pelota unos a los otros y tratan de que su traje de marca no se ensucie del barro. Por lo tanto, este curso los estudiantes tenemos que salir a las calles y hacerles entender que no pueden quitarnos

nuestros derechos mientras haya una sociedad capaz de responder colectivamente, que los defienden y que siempre vamos a estar para parar sus políticas contra el pueblo.

Entrevista realizada por Blas Ortega

El curso se inicia en Valencia con movilizaciones

El sábado 12 de septiembre, con el inicio de las clases, más de 10.000 docentes, alumnos, padres y madres de estudiantes recorrieron las calles del centro de Valencia para concluir la manifestación ante la plaza del Ayuntamiento. La convocatoria partió de los sindicatos convocantes de la huelga del fin de curso pasado, de la Plataforma per la Llengua, asociaciones de padres y madres, coordinadora de asambleas de centros y de otras plataformas.

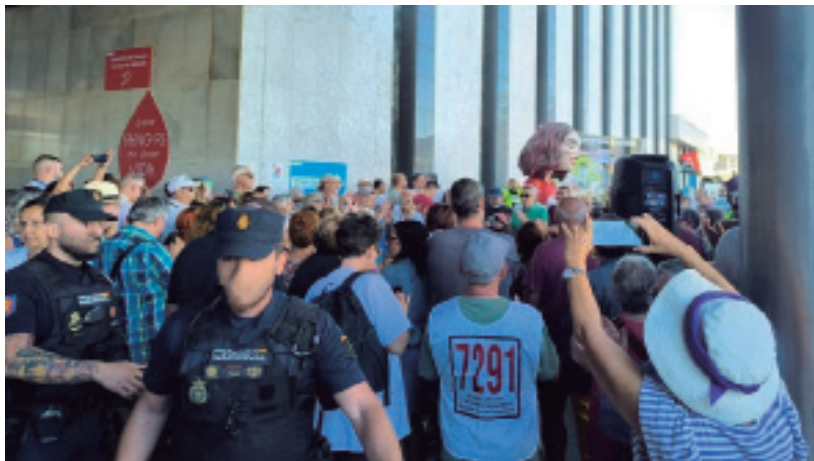
Los cortejos coreaban consignas con las reivindicaciones por las que fueron a la huelga y por la dimisión de la consejera de Educación.

La voluntad de resistir y de luchar para ganar las reivindicaciones no se ha apagado.

La lucha sigue este comienzo de curso, y corresponde a las asambleas de profesores, con los sindicatos, encontrar los medios necesarios para conseguir las reivindicaciones y barrer todos los obstáculos para ello, echando al gobierno PP-Vox cuanto antes.

Blas Ortega

La privatización mata, y lo saben



Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) 24 de junio 2026.
Fotografía cedida por la Asociación Vecinal NUDO SUR.

Madrid está gobernada por el PP con una idea política que desprecia la vida de las personas. La presidenta Ayuso lo expresó perfectamente, «se iban a morir igual», dijo, al referirse a las 7 291 personas mayores que murieron en las residencias de Madrid, tras negárseles la atención sanitaria hospitalaria.

El liberalismo asume la muerte violenta, pues es violencia no actuar o tomar decisiones a sabiendas de las consecuencias de ello, de personas inocentes; es la lógica de la guerra, llevada al extremo en Gaza por parte del Gobierno sionista de Netanyahu, apoyada por toda la derecha internacional y consentida de forma más o menos pasiva por muchas naciones que se dicen progresistas. La responsabilidad incluye a quienes votan a los partidos liberales, conservadores y de extrema derecha.

Esta lógica es con la que se gobierna en las comunidades autónomas en nuestro país; en unas con mayor intensidad, como es el caso evidente de Madrid y en otras más solapadamente. Bajo la cobertura de la abstracción de la «colaboración público privada»,

pues, llegados a este punto, donde dice «colaboración», en realidad evitan decir «fomento del negocio privado».

Lo vimos en el Hospital Universitario de Torrejón, en el que el CEO de la empresa Ribera Salud, a la que el Gobierno de Madrid otorgó por segunda vez, en 2018, la gestión de este centro hospitalario, dio la orden de aumentar las listas de espera y desechó a los pacientes no rentables, con la finalidad de aumentar los beneficios empresariales. Las denuncias contra esto fueron inadmitidas, el caso fue archivado por el Tribunal de Instancia de Torrejón, decisión avalada por la Audiencia de Madrid.

El CEO dimitió, los denunciantes sanitarios fueron despedidos y ahí continúa Ribera Salud haciendo beneficio. A la filosofía política de la derecha, en la que no hay respeto a la vida de las personas, se suma el auténtico burladero en el que se ha convertido la ¿justicia?, cuando los casos caen en manos de jueces, magistrados y fiscales que, por coincidencia ideológica, dan cobertura a estas aberraciones. Podría citar más casos, como la gestión

de los cribados de cáncer de mamá en Andalucía, las consecuencias de los recortes sanitarios en Galicia o las que la privatización en Castilla y León han tenido y están teniendo en el Hospital de Burgos, por señalar tres ejemplos.

Si embargo, quiero y debo resaltar la última explosión derivada de la gestión política de los seguidores de la motosierra en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, en el que un cirujano denunció hace unos días que, en este hospital público de gestión directa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se están manipulando las listas de espera, que cambian rebajando la gravedad de los pacientes pendientes de intervenciones quirúrgicas.

La denuncia del cirujano, contra quien la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso ha arremetido con todo tipo de infamias, decía que: «solo entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del presente año, a 57 pacientes en espera de cirugía se les cambió el criterio de preferente, cuyo plazo de intervención no debía superar los 90 días, a normal, para quienes el plazo es de 180 días».

La manipulación de la consideración de la gravedad la llevaron a cabo, a espaldas del médico que había dado esa calificación, los jefes de servicio, quienes siguen órdenes y criterios de la parte política de gestión del centro hospitalario; puestos a dedo por el Gobierno de Ayuso.

Este nuevo escándalo sanitario supone un salto cualitativo respecto a la destrucción de la sanidad pública, para allanar el camino por el que avanza la privatización de lo público.

Es urgente parar la privatización de la sanidad pública, tan urgente como poner coto a la especulación de la vivienda.

Roberto Tornamira Sánchez
Militante del PSOE en Madrid

Los sindicatos médicos convocan huelga indefinida a partir del 28 de octubre



Sindicatos médicos de distintas autonomías convocan huelga indefinida a partir del 28 de octubre contra el proyecto de Estatuto-Marco del personal de la Sanidad Pública, si bien no está claro que se llegue a llevar a cabo, ya que algunos de ellos han manifestado que aplazarían la huelga si se constituyese una comisión parlamentaria que elabore un nuevo Estatuto.

Como hemos señalado en ocasiones anteriores, en esa movilización de los médicos hay reivindicaciones justas, como acabar con las jornadas interminables de guardias, jubilación anticipada que tenga en cuenta esas horas de

exceso de jornada, cobrar esas horas, al menos como hora ordinaria, y no a precio de saldo.

Los sindicatos médicos utilizan esa justa indignación de los profesionales para poner por delante dos reivindicaciones corporativas: un estatuto propio para los médicos y un marco de negociación propio para sus condiciones laborales, separado del marco común de negociación.

Sin duda, estas peticiones se alimentan de un hecho, real, que los sindicatos que han negociado el estatuto con el Ministerio de Sanidad no han dado respuesta a las reivindicaciones que mencionamos, lo que refuerza la idea de

muchos médicos de que tienen que ser ellos y «sus» sindicatos los que negocien. Pero un marco separado de negociación para los médicos en la sanidad dinamitaría la negociación colectiva y podría extenderse a otros sectores y a muchas empresas.

El Partido Popular dice apoyar a los sindicatos médicos, aunque dos de las reivindicaciones, la disminución de horas de guardia y la subida del pago por las guardias, dependen de las autonomías a las que está transferida la sanidad, y 11 de ellas son gobernadas por el PP. Se da la circunstancia de que el estatuto de Mónica García propone reducir de 24 a 17 horas la duración de las guardias médicas, y 7 autonomías gobernadas por el PP han hecho alegaciones contra esa reducción.

Lo que demuestra que, en realidad, su supuesto apoyo a los médicos sólo es un artificio para hacer daño al gobierno de Pedro Sánchez.

Si se quiere evitar el grave daño que una huelga indefinida de médicos puede hacer a la sanidad pública, gobierno y autonomías tienen que ponerse de acuerdo para dar satisfacción a las reivindicaciones de los médicos sobre reducción de jornada, reducción de las horas de guardia y mejora de las retribuciones de las guardias.

Luis González

Cataluña: El sector de los servicios sociales dice basta



Los sindicatos UGT, CC. OO. y CGT en unidad convocan movilizaciones y huelga para el próximo 7 de octubre. La primera huelga del sector en Cataluña. Las reivindicaciones recogen un amplio cuadro de necesidades ante el ninguneo de la administración al sector, siendo como es uno de los pilares que sostiene el estado del bienestar social.

Son las trabajadoras y trabajadores que reciben en primera línea la presión de la ciudadanía con necesidades urgentes y básicas, acompañan y protegen a la infancia, la gente mayor, los ciudadanos con discapacidad, salud mental, temas de igualdad, la dependencia, exclusión social... y que son las primeras personas que deben abordar verdaderas experiencias duras ante la falta de recursos.

La precariedad laboral y la privatización se han impuesto en el sector, cada vez más abandonado por las instituciones. Faltan profesionales y esta situación, sin duda, además repercute sobre los usuarios.

Los trabajadores y trabajadoras agrupadas en sus sindicatos reclaman un cambio de modelo, más financiación y unas condiciones laborales dignas.

En defensa de un sector de servicios sociales de titularidad pública y gestión pública, la plataforma reivindicativa recoge:

- Excepción a la Ley de Desindexación de la Economía: Modificación legislativa para permitir revisar y modificar las licitaciones públicas en curso con el objetivo de lograr la equiparación salarial y las mejoras de los convenios. La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española es una ley del ordenamiento jurídico español vigente desde el año 2015 por la que se desvinculan de la evolución del IPC los precios en cuya financiación interviene, total o parcialmen-

te, alguna entidad del sector público.

- Jubilación anticipada: aplicación de coeficientes reductores por penosidad.

- Ratios y cartera de servicios: disminución de ratios y modificación de la cartera de servicios sociales para evitar la sobrecarga y garantizar una atención de calidad. No basta con cumplir las ratios sobre el papel: hay que garantizar las presencias reales de profesionales durante todos los turnos y durante todo el tiempo de atención.

- Contrato-programa con más financiación: dotación presupuestaria suficiente para cubrir las necesidades reales, mejorar las condiciones laborales y elevar la calidad de la atención.

- Formación continua: garantizar el acceso a formación actualizada para el desarrollo profesional y una mejor intervención social.

- Cuidado de las trabajadoras: disponibilidad de apoyo psicológico, supervisión de casos y asistencia jurídica para prevenir el desgaste emocional.

- Reducción de la burocracia: transición hacia un modelo comunitario y transversal centrado en la intervención de calle y el diagnóstico, evitando la simple gestión administrativa. La vocación no paga las facturas ni justifica la precarización. La mejora de la financiación pública tiene que ir directamente a las nóminas y a la mejora de la calidad de vida de quien cuida.

- Equiparación salarial, para que a igual trabajo correspondan los mismos derechos y las mismas condiciones laborales.

- Más estabilidad laboral, para consolidar equipos profesionales y garantizar la continuidad de la atención.

Y se convoca una manifestación para el mismo día 7 a las 10:00 h de la mañana en el Parque de la Ciudadela de Barcelona.



Sabadell

Reunión de docentes

Reunidos en Sabadell el 17 de septiembre, sindicalistas del sector de la docencia debatieron el papel de las movilizaciones docentes en Catalunya y destacaron, como principal reivindicación del sector, la necesidad de dotar de recursos suficientes a la escuela inclusiva.

Aunque el acuerdo firmado por CCOO, UGT y ASPEC con el Departament d'Educació implica una subida salarial que, sumada a los incrementos negociados a nivel estatal para los empleados públicos, supondrá un aumento cercano al 30% en cuatro años, es necesario que los sindicatos exijan a la Administración catalana el cumplimiento de los plazos recogidos en dicho acuerdo.

El malestar docente, sin embargo, no se debe únicamente a la insuficiencia de los salarios. Para mejorar las condiciones laborales y garantizar una educación pública de calidad son también necesarias la contratación de personal de apoyo y la reducción de las ratios de alumnado.

Corresponsal

Solidaridad con Palestina

Adjuntamos cartel que informa de las numerosas convocatorias de manifestaciones durante el mes de octubre en ciudades de España en solidaridad con el pueblo Palestino



Contra la guerra

Tras Londres 20J: hacer, debatir, hacer...

Bilbao: sábado, 26 de septiembre de 2026

El sábado 26 de septiembre el Círculo de Bilbao de PODEMOS ha organizado una Mesa Redonda para debatir de la continuidad de las campañas acordadas en Londres 20J en el entorno social y político en el que vivimos, que si bien es como el resto del Estado sometido a la opresión de la Monarquía heredada del franquismo y a las instituciones de la UE, tiene características propias de una nacionalidad a la que nunca se le ha permitido elegir su camino. Y eso afecta también a cómo ser más efectivos en la lucha contra la guerra, preocupación que recorrió todo el debate.

Hay que destacar la impecable organización del acto la y administración de los tiempos a cargo de Rosana.

¿Estamos ante «una guerra» o ante «muchas guerras»? Una pregunta que no es anecdótica y que al decir de una gran parte de los asistentes es una sola política que unifica a todos los capitalistas del mundo porque es el mejor negocio que tienen a mano, aunque la forma y los efectos sean

múltiples guerras y conflictos destructivos a más no poder.

¿Es cierto que los jóvenes «pasan de todo» aunque sean los más afectados por la guerra, o incluso sean de extrema derecha? Un impresionante debate, muy rico en matices y que alumbró cierta dosis de optimismo y de decisión de actuar para ayudar a los jóvenes a movilizarse por sus propios intereses y a su forma. Una gran ayuda la presencia de Rakel Asensio, candidata joven al Ayuntamiento de Bilbao.

¿Cómo relacionar la guerra con sus horrores y los problemas de cada día, laborales, sociales, con el hecho palpable del aumento de la represión policial, judicial, con la Ley Mordaza en la mano?

Otro motivo de debate en el que se expresaron numerosos casos concretos, contando con la presencia de Luis, Marian, Jesús Mari, Juanen, Txusa, etc., conocidos activistas en la defensa del sistema público de pensiones, así como de sindicalistas que llevamos la batalla concreta de la lucha contra la guerra y que nos hemos empeñado,

incluso desde distintas organizaciones, en no permitir que nos convenzan de las virtudes del rearme. Juanma hizo un alarde de datos sobre cómo eso se está implementando en Euskadi, y afirmó con acierto que no es solo que lo hagan gobiernos progresistas central o vasco, sino que el silencio de casi toda la izquierda es muy sonoro, escandaloso en el caso de la principal organización de la oposición, EH Bildu, en su opinión.

¿Por qué habiendo un movimiento ya de carácter mundial en marcha contra el genocidio en Palestina en el País Vasco a partir de Londres 20J parece haber un empeño en que los ciudadanos vascos no participemos en ese gran movimiento? La Comisión Vasca contra la Guerra - Gerraren Aurka explica las dificultades y la falta de información existente para entender por qué en torno al día 10 de octubre, Jornada Internacional contra el genocidio en Palestina convocada ya desde junio de este año en Londres, hay tres convocatorias distintas, de organismos que

reclaman el alto al genocidio en Palestina pero que no hacen ninguna referencia a esta jornada y al parecer ni se hablaban entre ellos. Joseba, responsable de Movimientos Sociales de Podemos Euskadi nos ha explicado con gran contenido general que ha tenido una reunión con el Colectivo Gernika-Palestina Ekimena y parece haber un camino a hacer en unidad.

Los presentes en el acto, algunos miembros activos de la Comisión Abierta recogemos el sentir de los presentes y haremos todo lo posible por reunirnos con todos los colectivos para buscar un camino de unidad empezando por un apoyo explícito a la Jornada Internacional y al movimiento en marcha a su alrededor y anunciarles que estaremos presentes en sus convocatorias con una pancarta relativa a dicha jornada.

Un buen día, sin ninguna duda.

*Mikel González
Bilbao*

Sant Boi de Llobregat: 17 de Septiembre

El pasado 17 de septiembre en el Centre Civic del Barri centre, se celebró la reunión convocada por la CATP, con la presencia de la delegación que participó en el mitin internacional celebrado el 20 de junio en Londres.

Se informó de la continuidad de las tres iniciativas aprobadas en la conferencia previa.

Con relación al 10 de octubre y la movilización en solidaridad con Palestina.

El portavoz del Comité contra la guerra y el genocidio del pueblo palestino, informó de reunión convocada en Barcelona en preparación de la manifestación a realizar en Barcelona el 4 de octubre.

El argumento que ella prevaleció era desplazar la manifestación al

día 4 de octubre, ya que es España el día 12, lunes, es festivo.

En cuanto al manifiesto general convocando se comentaron dos aspectos a tener en cuenta: el primero relativo a lo que se solicita el boicot y expulsión del territorio de Catalunya a empresas como Carrefour y en particular ICL.

Ambas suman alrededor de 16.000 puestos de trabajo directos e indirectos y eso introduce un elemento de división entre las organizaciones sindicales que pese a no firmar el manifiesto siguen convocando a la manifestación.

También se lamentó de la ausencia en el texto de la campaña internacional por la liberación del doctor Abu Safiya, que ha sido una constante en las movilizaciones.

Con relación a la campaña en defensa de los desertores.

Se informó de la marcha de la campaña. En particular solicitando ahisiones al manifiesto.

Con relación a la campaña contra el servicio militar obligatorio.

Avallot (organización juvenil de UGT) y la continuidad de la campaña se esta dirigiendo a otras organizaciones juveniles en preparación de una delegación al Parlament de Catalunya.

Con relación a la campaña de los Estibadores

Acordamos preparar una delegación a los estibadores de Barcelona y Tarragona para coordinar reuniones de trabajo en es línea.

Con relación a los acontecimientos de Ceuta

Tras un interesante debate acordamos

trasladar a la población el mismo organizando un acto-debate el próximo 8 de octubre bajo el título "El derecho a migrar"

Corresponsal



Madrid estalla ante el desahucio de Mari Carmen

Más allá del juego habitual de asistentes entre la delegación del gobierno (25.000) y los organizadores (300.000), no se puede negar que ayer Madrid fue tomada por miles y miles de ciudadanos frente a la situación que venimos sufriendo la clase trabajadora en cuanto a la pérdida paulatina de derechos, y en particular el derecho a una vivienda digna. (Ver página 8 de este mismo número).

El estallido que ha supuesto el desahucio de Mari Carmen trata de imponer la aprobación por parte del ejecutivo de un decreto que permita la renovación automática de los contratos de alquiler, así como la congelación de los precios y la prohibición de los desahucios, este mismo martes.

“Señora Ayuso, entérate: si yo no

tengo casa, tu casa okuparé”. “El ático de Ayuso para Mari Carmen” fueron las consignas más coreadas en una manifestación que, a la convocatoria del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, se sumaron otros colectivos y organizaciones.

Entre ellos, un nutrido grupo de bomberos que manifestaban que no es su trabajo el participar en los desahucios, así como su rechazo a ser utilizados por las instituciones como cómplices y, en definitiva, ejecutores.

Tienen razón los que afirman que los verdaderos invasores son los inversores inmobiliarios y no los migrantes que buscan vivir con dignidad.

Corresponsal



Última hora.

28 de septiembre, movilizaciones por el derecho a la vivienda

Movilizaciones por todo el estado por el derecho a una vivienda digna: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva, Palma, Zaragoza...

La jornada empezó a primera hora de la mañana con sucesivas concentraciones, cortes de tráfico y asambleas.

En Barcelona, la concentración más numerosa se realizaba frente al “*Palau de Congressos de Catalunya*”, ubicado junto a las universidades del Campus de Diagonal, aprovechando la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que previamente se había reunido con el G8 catalán. Las fuerzas policiales no pudieron evitar, ante el gran número de manifestantes exigiendo el decreto denominado Mari Carmen, que se acabara por cortar el tráfico de la Avenida

Diagonal, una de las arterias de Barcelona.

Simultáneamente, se convocaron asambleas y concentraciones en las plazas de los ayuntamientos, de apoyo a los acampados en la plaza Sol de Madrid y para organizar la movilización en el supuesto de que el decreto del gobierno, si este no recoge las reivindicaciones exigidas por el Sindicato de Inquilinas, que se concentran en concreto:

1. Renovaciones automáticas para acercarse a los contratos indefinidos
2. Cambiar las reglas para acabar con los abusos en los alquileres
3. Congelar el precio durante la duración del contrato.
4. Frenar los desahucios sin alternativa habitacional

Corresponsal



Concentración en Sant Boi convocada por la “Assemblea d’Habitatge”

Euskadi en la pelea por no perder poder adquisitivo

Euskadi vuelve a situarse a la cabeza del país en un indicador que rara vez ocupa titulares, pero que decide el día a día de cientos de miles de familias: la protección de los convenios colectivos. La inmensa mayoría de las personas asalariadas de la comunidad trabaja hoy bajo un convenio pactado, una cifra que sitúa a Euskadi por delante de la media española y confirma algo que en el mundo laboral vasco ya se sabía: aquí se negocia, y se negocia con resultados.

Ese logro no es casualidad. Es fruto de una cultura de movilización que atraviesa toda la sociedad vasca, con una afiliación sindical que dobla la media estatal y una tradición de defensa de las condiciones laborales que pocas comunidades pueden igualar. Ese pulso constante entre patronal y representación de los trabajadores explica también por qué Euskadi encabeza las subidas salariales pactadas en convenio, por encima de la media del conjunto del Estado.

Esa cabecera se sostiene, sobre todo, en la pelea por no perder poder adquisitivo. Con el IPC adelantado cercano al 4% frente a una subida media pactada del 3% en el conjunto del Estado, Euskadi negocia por encima de esa media, pero el problema de fondo sigue siendo estructural: apenas 3 de cada 10 convenios incorporan una cláusula de garantía salarial que revise los sueldos cuando el IPC supera lo pactado, dejando a más de la mitad de la población asalariada sin blindaje ante la escalada de precios. Frente a ese descontrol, UGT reclama que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva fije una subida mínima del 4% anual para 2026-2028, con cláusulas de revisión ligadas al IPC real, para que ninguna patronal cierre un convenio sin garantizar el

poder adquisitivo. De hecho, en la propia negociación del convenio de la siderometalurgia de Bizkaia se está planteando esa misma fórmula: vincular la subida al IPC real más un porcentaje adicional variable, en lugar de cerrar cifras fijas que puedan quedar de nuevo por debajo de la inflación.

El mapa sindical vasco es, sin embargo, un mapa dividido. Conviven organizaciones de ámbito autonómico, con fuerte implantación en la representación de delegados, junto a sindicatos de raíz estatal que, sin ser mayoritarios en representación, mantienen una capacidad negociadora decisiva: buena parte de los convenios sectoriales y de empresa que se firman cada año en Euskadi llevan su firma, junto al resto de fuerzas sindicales, logrando acuerdos que amparan a muchas más personas de las que representarían sus resultados electorales por sí solos.

No todo, sin embargo, es sintonía. En los últimos meses se ha abierto un debate sindical sobre el papel del euskera en el ámbito laboral. Desde los sindicatos de raíz estatal se defiende que es lengua cooficial que merece protegerse y fomentarse en el trabajo, con un matiz: no puede convertirse en barrera de acceso al empleo, sobre todo en el tejido productivo privado y los sectores industriales que sostienen buena parte de la economía vasca. Fomentar el euskera y garantizar la igualdad de oportunidades no son objetivos contrapuestos, sino compromisos que deben caminar juntos.

Con matices y debates internos, el sindicalismo vasco sigue siendo el motor que explica por qué Euskadi es, convenio a convenio, uno de los territorios donde mejor protegida está la clase trabajadora de toda España.

Raúl Ayuso

Llamamiento a una campaña de apoyo a los desertores en Europa

Las autoridades de la Unión Europea están debatiendo actualmente medidas severas destinadas a restringir la entrada de ciudadanos rusos que hayan participado en los combates, incluidos aquellos que se han negado a continuar la guerra. Estas medidas ya se están haciendo realidad: varios Estados europeos deniegan sistemáticamente el asilo a los desertores rusos, acusándolos de «complicidad» y privándolos de toda posibilidad de refugio seguro. Y ello a pesar de que numerosos ciudadanos rusos han sido obligados a servir en el Ejército, una presión que no deja de intensificarse.

Al mismo tiempo, la desertión y el abandono no autorizado del puesto en el Ejército ruso aumentan como respuesta a una guerra interminable y a los crímenes del régimen. Según las estimaciones de periodistas independientes y de la comunidad OSINT, desde el inicio de la invasión a gran escala se han registrado entre 100.000 y 120.000 casos de negativa a participar en actos de violencia y masacres. Solo entre el 15% y el 20% de estos casos han dado lugar a acciones judiciales. La mayoría de los desertores permanecen en Rusia sumidos en un miedo constante: en caso de ser detenidos, se enfrentan a la tortura, el encarcelamiento, el envío a «batallones de asalto» o la muerte en el frente. Solo una ínfima minoría consigue llegar a un país seguro.

La desertión es un poderoso instrumento contra la guerra: debilita la maquinaria militar del régimen y salva vidas. Apoyar a quienes eligen la vida y la paz puede acelerar el fin del conflicto y convertirse en una señal contundente a favor de cambios internos en Rusia.

Conceder el derecho de asilo es competencia de la soberanía de los Estados nacionales. Sin embargo, Europa les cierra casi todas las puertas. Incluso en Francia, donde la CNDA ha reconocido que la desertión puede constituir un motivo de asilo, solo unas pocas personas han

obtenido protección. En Alemania, a principios de 2026, las autoridades comenzaron a multiplicar las denegaciones de asilo a los desertores rusos. Al mismo tiempo, varios países de la UE barajan una prohibición total de entrada para todos los ciudadanos rusos que hayan participado en la «SVO», privando así a estas personas del derecho a la vida y a la protección humanitaria.

Del mismo modo, por razones humanitarias, reconocemos el derecho de los desertores ucranianos a recibir protección en la UE. El derecho a la vida y a la libertad prevalece sobre los derechos del Estado.

Exigimos medidas inmediatas:

— Reconocer la negativa a participar en la guerra (deserción y abandono no autorizado del puesto) como motivo legítimo para obtener el derecho de asilo en cada uno de los países y la protección de la Unión Europea. Se trata de un acto de conciencia y de una negativa a participar en crímenes.

— Expedir documentos de viaje humanitarios (salvoconductos) a las personas que carezcan de pasaporte internacional, para que puedan desplazarse de forma segura en la UE y presentar una solicitud de protección.

— Informar ampliamente a la población rusa sobre las posibilidades de protección, para que la desertión se convierta en una opción realmente accesible, y no en un acto de desesperación.

Cada denegación de protección pone una vida en peligro. Cada puerta abierta es una oportunidad para la paz y para los cambios internos. Europa debe abrir sus puertas a quienes eligen la vida y la humanidad, y no reforzar la guerra y la represión.

Primeros firmantes del Estado español

Aguiar Moli Pablo, (Director de la Fundación por la Paz); **Alberdi Asensio Tomás**, (Responsable de Sociedad Civil de Podemos Madrid); **Álvarez Elena**, (UGT Federación Función Pública); **Amores Pilar**, (Feministas San Blas-Canillejas); **Andoni Fernández Joseba**, (Delegado en Londres 20J -Podemos Euskadi); **Anguita Trinidad**, (Técnica de educación-Bilbao); **Arcas Rosario**, (Feministas San Blas-Canillejas); **Arnold Frank**, (Miembro de la Comisión Internacional de la COESPE); **Arrasquin Marisa**, (Plataforma Centro); **Arrizabalo Xavier**, profesor de Economía de la Universidad de Madrid (España); **Ayuso Raúl**, (Agente sindical UGT- Euskadi); **Baena Varela Isabel**, (UGT oficinas y despachos); **Blázquez Teresa**, (Portavoz estatal de COESPE); **Burguera Vera Andreu**, (UGT); **Camargo Hilario**; **Camino Gimena**; **Capataz Cayetana**, (Portavoz del Colectivo de Pensionistas de Rivas-Vaciamadrid); **Casado Peña Juanjo**, (RMB UGT -Cat); **Chung Mercedes** (Delegada-UGT); **Crespo Chacón Ángela**, (Colectivo de Rivas); **Darriba José Luis**, (Portavoz de la Plataforma de Rivas); **Dávila Gladys**, (Feministas San Blas-Canillejas); **De la Cruz Pérez Celestina**, (No + Precariedad); **De Madariaga Martín Eneritz**, (Podemos Euskadi. Apoderada en la Juntas Generales de Bizkaia. Trabajadora Social); **De la Rosa Manolo**, (activista social); **Delgado Iñaki**, (Militante de Podemos, Galdakao); **Díaz Catalá Miguel Ángel**, (Afiliado asociación Euskadi-Cuba); **Diego González Antonio**, (Pensionistas de San Blas-Canilljas); **Domingo Francisco**, (Portavoz de la Plataforma de San Sebastián de los Reyes); **Encinas Ana**, (Médica de Atención Primaria); **Fernández Juan Miguel**, Exasesor Técnico del Tribunal de Cuentas; **Fernández Ana**, (Portavoz de la Plataforma de Fuencarral); **Fernández Dora**, (Portavoz de Moratalaz); **Fernández Iñigo**, (Miembro Comisión Ejecutiva de UPTA Euskadi - UGT, Portugalete); **Gadea Nebreda Marisa**, (Concejala de Alternativa Vecinal de Sopela-Pais Vasco); **Freyja Carmen**; **Galán Juan**, (Pensionistas de San Blas-Canilljas); **Gallejo Pedro**, (Agente sindical, UGT Euskadi); **García M. Carmen**; (Portavoz del Colectivo de Mujeres Pensionistas de Coorpen Madrid); **García Ramírez Pedro**, (Jubilado. Badalona); **García Narci**, (Feministas San Blas-Canillejas); **Gascón Manzanares Amparo**, (Plataforma Aluche-Madrid); **González Mendoza Miguel** (Abogado); **González Sola Mikel**, (Secretario de Organización, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi -UPTA Euskadi); **González Luis**, (Del consejo confederal de CCOO); **Grolimund Amparo**, (Agora Sol Radio); **Iglesias López Julia**, (Enfermera, Getxo); **Illera M.Concepción**, (Colectivo de Mujeres Pensionistas de CoorpenMadrid); **Lagunas Lapoza Sebastián**, (Plataforma por la Unidad en defensa del sistema público de pensiones y la Seguridad Social, Leioa); **Llibre Cati**, (Vicesecretaria general de UGT Catalunya); **López Francisca**, (Portavoz estatal de COESPE); **López Carmen**, (Portavoz de Marea de Residencias Madrid); **López Jesús**, (Sindicalista, CCOO); **López Pilar**; **López Valladolid Eduardo**, (Portavoz de la Plataforma por la

unidad en defensa del sistema público de pensiones y la Seguridad Social-Erandio); **Maite**, (Trabajadora Social-Jubilada); **March Nogué Jordi**, (Físico); **Maria Elena**, (Trabajadora social); **Marquinez Bascones Fernando**; **Martín Lorenzo Manuela**, (Militancia Podemos-Euskadi, Leioa); **Martínez Fernández Silvia**, (Secretaria General UPTA Euskadi); **Martínez García Roberto**, (Técnico Especialista en Electrónica Industrial); **Medina Alvarado Virginia**, (Jubilada); **Medrano Pilar**, (Miembro de la Comisión Internacional de la COESPE); **Melian Antonia**, (Colectivo de Mujeres Pensionistas de Coorpen Madrid); **Méndez Ketty**, (Plataforma de Mayores, Carabanchel); **Merino Iñaki**, (Sindicalista UGT Euskadi); **Miren Koldobike**, (las Palmas); **Montero Rodas Félix**, (Círculo de Podemos, Puente de Vallecas); **Moreno Lola**, (Portavoz de la Plataforma Aluche-Madrid); **Nava Juan Carlos**, (Canarias, librero); **Novoa López Jose Antonio**, (Jubilado UJP-UGT -Álava); **Ocaña López José Manuel**, (UJP-UGT Comunicación); **Paredes Carmen**, (Portavoz de Comunicación de CoorpenMadrid-COESPE); **Partida Teresa**, (Plataforma Moratalaz); **Pera Arena Jaume**, (Jubilado); **Pérez Ana**, (Portavoz de CoorpenMadrid-COESPE); **Pérez Martínez Jesús Mari**, (Portavoz de la Plataforma por la UNIDAD en defensa del sistema público de pensiones y la Seguridad Social-Leioa); **Pérez Núñez Carmen**, (Tagoror Feminista por la Paz y el Desarme-Canarias); **Pol**, (Estudiante de Derecho); **Pozo Josep Antoni**, (Historiador); **Prieto Ángel**, (Portavoz de la Plataforma de Mayores y Pensionistas de Carabanchel); **Real Concha**, (Feministas San Blas-Canillejas); **Rodríguez Arias Rosana**, (Responsable de organización de Podemos Bilbao); **Rodríguez Hernández, Juan Manuel** (A título personal militante de Podemos); **Rodríguez Juan Manuel**, (Militante de Podemos Euskadi, Bilbao); **Rodríguez Damián**, (Portavoz estatal de COESPE); **Roig Daniel**, (Técnico de laboratorio); **Rondón Juana**, (Portavoz de CoorpenMadrid-COESPE); **Ruiz Robles Manuel**, (Excapitán de navío); **Salh Jamal**, (Médico e historiador, condecorado con la Cruz de San Jorge); **Salvador Altes Albert**, (AVALOT); **Salvador Duch Jordi**, Diputado del Grupo Republicano ERC); **Salvatella Piua**, (Jubilada); **Sampedro María**, (Plataforma pensionistas Centro-Madrid); **Serrano Blanquer Jordi**, Rector emérito de la UPC (Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya); **Sutíl Llona Kepa**, (Pensionista, Gamiz-Fika, Bizkaia); **Tarres Pau**, (sociólogo); **Tornamira Roberto**, (Presidente de ASTRADE -Asociación Trabajo y Democracia); **Torralla Concepción**, (Portavoz de la Plataforma Chamberí); **UGT Catalunya**; **Villalba José**, (Portavoz de la Plataforma Centro); **Villanueva Aurelio**, (Portavoz de la Plataforma de San Blas); **Vizquete Pablo**, (Portavoz de la Plataforma Vallekaia); **Wanceulen, M^{ra} José** (Del consejo confederal de CCOO); **Xambó Rafael**, (profesor de Sociología en la Universidad de Valencia); **Zuluaga Ainhoa**, (Militante de Podemos Bilbao).

Podéis enviar vuestra adhesión a apoyoalosdesertores@gmail.com

Desahucio de Maricarmen: ¿a quién defienden los jueces y policías?



La policía bloquea la calle durante el desahucio

El pasado 23 de septiembre, Maricarmen, una mujer de 87 años, fue desahuciada de la vivienda en la que habita desde hace 70 años, en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. El desahucio fue ordenado por el juez, que mandató directamente a la policía

para echarla y para disolver violentamente a un numeroso grupo de personas que trataba de impedir que echaran a la calle a la anciana.

Se da la circunstancia de que Maricarmen tiene una discapacidad reconocida del 50%: sufre movilidad

reducida por varias operaciones de cadera. De hecho, una vez desahuciada tuvo que ser trasladada a un hospital, donde fue ingresada en observación.

La familia de la desahuciada ya vivió en este piso en alquiler desde el año 1956. Cuando murió el padre de Maricarmen, el contrato se subrogó en su madre. Y cuando esta última falleció en el año 2005, Maricarmen pudo subrogarse la titularidad del mismo, con el beneplácito de la propiedad, con un contrato de alquiler de renta antigua, cuya renta se actualizaba cada año en base al IPC, y por el que asumía gastos como el IBI. Recordemos que hasta el 85, los contratos de alquiler podían ser vitalicios.

Los problemas comienzan en 2018, cuando los propietarios de toda la finca deciden venderla entera a Renta Corporación, uno de los grandes holding inmobiliarios españoles. Lo primero que hizo este holding fue ofrecerle el piso por 247.000 euros, una cuantía que no tenía ahorrada y por la que no podría optar a hipoteca con ninguna entidad bancaria debido a su avanzada edad.

Luego, Renta Corporación vendió este inmueble a una empresa especuladora, Urbagesa, que desde entonces intenta desahuciar a Maricarmen.

Los dos empresarios, Ricardo y Fernando Alonso, propietarios de Urbagesa, em

prendieron acciones judiciales contra Maricarmen, tras notificarle que su contrato de renta antigua subrogado debió haberse extinguido en 2007.

El Juzgado de Primera Instancia tumbó las aspiraciones de los empresarios, dándole la razón a la pensionista. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo dieron la razón al fondo al entenderse que la «segunda subrogación del contrato» solo pudo tener «una duración de dos años» porque Maricarmen no tenía una disca

pacidad de más del 65%.

El desahucio de Maricarmen, la violencia policial que lo acompañaron, demuestra para quién trabajan el aparato judicial y el aparato represivo heredados del franquismo. No para garantizar los derechos de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la vivienda, sino para defender los derechos de los especuladores. Hay que acabar con esta basura franquista.

L.G

Hay que expropiar las viviendas de especuladores y fondos buitres

Tras las importantes movilizaciones que se han producido en protesta por el desahucio de Maricarmen se han puesto sobre la mesa varias propuestas de actuación.

Algunos proponen una moratoria de los desahucios; Sumar ha lanzado una petición de firmas para pedir al Gobierno -¡del que Sumar forma parte!- que se expropie el piso donde vivía Maricarmen.

Hay muchos casos como el de esta anciana, aunque quizá no tan dramáticos. Hay que poner sobre la

mesa una solución para todos ellos.

El derecho a la vivienda choca, como demuestran los hechos, con el derecho a la propiedad privada de especuladores y fondos buitres.

El Gobierno debe prohibir la compra de viviendas por parte de fondos de inversión. Y debe expropiar todas las viviendas que están en manos de grandes tenedores, especuladores y fondos buitres, y ponerlas a disposición de una empresa pública de vivienda que garantice alquileres asequibles.

IPC: la vida sube más que las pensiones



El IPC volvió a situarse en agosto en el 4,3%. No es un número más en una estadística: es el precio del pan, de la fruta, de la carne, de la electricidad, del gas, del transporte y de los medicamentos. Es, para millones de pensionistas y trabajadores, una nueva vuelta de tuerca a una economía doméstica ya asfixiada.

el precio de los alimentos básicos sube un 8%, 10% o 12%, y las pensiones crecen un 3%, 4% o 5%,

Las pensiones contributivas se revalorizaron este año un 2,7% de acuerdo con la medida del IPC del periodo comprendido entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Recuperar la actualización con el IPC fue una conquista frente a las congelaciones y las subidas irrisorias de otros años. Pero la experiencia cotidiana demuestra que esa garantía no basta cuando la inflación se acelera y los productos indispensables suben por encima de la media.

Porque el IPC oficial mide una cesta general de bienes y servicios, no la cesta real de quien vive de una pensión. Una persona mayor dedica una proporción mucho mayor de sus ingresos a alimentos, suministros, vivienda, cuidados, transporte y salud. Cuando esos gastos se encarecen, el porcentaje medio de inflación puede ocultar una pérdida de poder adquisitivo muy concreta: menos alimentos frescos, menos

calefacción, menos dinero para medicación o para afrontar una residencia y la atención a la dependencia.

La subida de la pensión llega, además, con retraso. La revalorización de enero se calcula sobre la inflación pasada. Si los precios aumentan con fuerza durante el año, quienes cobran una pensión deben asumir ese golpe en el presente y esperar a la siguiente actualización. Para quien percibe una pensión baja es elegir entre necesidades básicas.

Cuando el precio de los alimentos básicos sube un 8%, 10% o 12%, y las pensiones crecen un 3%, 4% o 5%, el resultado es claro: pérdida de poder adquisitivo. Y esta pérdida año tras año es devastadora.

... defender las pensiones públicas es defender el derecho a la jubilación sin pobreza ...

La pobreza no empieza cuando falta absolutamente todo. Empieza cuando una persona mayor o un trabajador/a evita encender la calefacción, aplaza una visita médica, reduce su compra o deja de participar en la vida social para poder pagar un recibo. Y esta situación no afecta solo a pensionistas: golpea también a familias enteras que dependen de esos ingresos para sostener cuidados, vivienda y alimentación.

COESPE, de manera unitaria, reclama que las pensiones públicas y los salarios suban en 2027 lo suficiente

Manifestación de pensionistas en Madrid

para recuperar lo perdido, junto con una paga compensatoria y una cláusula de revisión que impida nuevas pérdidas. La reivindicación parte de una realidad sencilla: no se puede medir la dignidad con una medida estadística mientras los bienes esenciales encarecen la vida por encima de los ingresos.

Defender las pensiones públicas no es una demanda corporativa ni tajante. Es defender el derecho a la jubilación sin pobreza y a una sociedad que no abandone a quienes trabajaron durante décadas y siguen sosteniendo familias, barrios, y redes de cuidados. La inflación tiene responsables y consecuencias sociales. Pensiones suficientes, salarios dignos, servicios públicos fuertes y control de los precios de los bienes básicos.

La vuelta del verano nos ha situado en la cruda realidad, y nos llena de razones y argumentos para seguir llamando a la movilización continua en todo el Estado, en plazas y pueblos con «los Lunes al Sol», ante las instituciones, Gobierno, Congreso, administraciones autonómicas y municipales, caminando hacia la manifestación del 24 de octubre en Madrid.

Gobierno quien gobierne, los derechos los salarios y las pensiones públicas se defienden

Septiembre 2026
Ana, pensionista

El 24 de octubre nos manifestamos en Madrid

Desde COESPE, hacemos un llamamiento a toda la sociedad -jóvenes, trabajadoras y trabajadores, mayores, pensionistas, movimientos sociales, asociaciones vecinales y organizaciones sindicales- a participar en la manifestación.

Defender nuestros derechos es cosa de todos y todas

Un año más, las principales organizaciones de pensionistas del Estado nos unimos para defender nuestros derechos y los de toda la clase trabajadora. La manifestación partirá a las 11:30 horas desde Atocha hasta la calle Alcalá (metro Sevilla).

La coatoria está promovida por COESPE, EHPV, MODEPEM, MADPP, UnidadCOESPE, Plataformas de Pensionistas de Badajoz y Móstoles, junto con otras organizaciones sociales, sindicales y políticas que se han sumado a esta movilización.

Tenemos razones más que suficientes para salir a la calle. Defendemos unas pensiones públicas dignas, suficientes y sostenibles, y reclamamos una pensión mínima igual al Salario Mínimo Interprofesional. Exigimos medidas que permitan hacer frente al encarecimiento de los productos básicos y acabar con la brecha de género que afecta especialmente a las pensiones de las mujeres.

También exigimos la derogación de la Ley Mordaza, porque defender nuestros derechos no puede convertirse en motivo de sanción. Reclamamos que se cumpla la Ley 21/2021 de Auditoría Pública de la Seguridad Social y rechazamos los planes de pensiones privados de empresa como vía para sustituir o debilitar el sistema público.

Reivindicamos asimismo una jubilación anticipada sin penalizaciones para quienes hayan cotizado 40 años y exigimos que las pensiones públicas se revaloricen en acuerdo con el IPC real, para evitar que trabajadores y pensionistas sigamos perdiendo poder adquisitivo.

Nuestra movilización también está vinculada a la defensa de los servicios públicos y de las necesidades sociales. Mientras se destinan cada vez más recursos al gasto militar, reclamamos

que el dinero público se emplee para garantizar derechos fundamentales: sanidad, educación, vivienda, dependencia y pensiones públicas.

Decimos alto y claro ¡No al rearme! ¡No a la militarización obligatoria! ¡No a las guerras!

El aumento del gasto militar y la privatización de derechos afectan al conjunto de la sociedad. Por eso la defensa de las pensiones no es únicamente una cuestión de pensionistas, es una lucha que afecta a toda clase trabajadora y a las generaciones presentes y futuras.

¡No al rearme! ¡No a la militarización obligatoria! ¡No a las guerras! El aumento del gasto militar afecta al conjunto de la sociedad.

El próximo 24 de octubre tenemos una nueva cita en Madrid. Tenemos que llenar las calles y hacer oír nuestras reivindicaciones. Porque los derechos no se conceden, se defienden con organización y movilización.

¡Os esperamos en Madrid el 24 de octubre!

Gobierno quien gobierne, los derechos los salarios y las pensiones públicas se defienden.

¡No faltes!

A.P, pensionista

24 DE OCTUBRE
MANIFESTACIÓN ESTATAL
PENSIONISTAS
 DEFENDAMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

12H | ATOCHA - C/ ALCALÁ, METRO SEVILLA

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES:
 DEFENDE VUESTRAS FUTURAS PENSIONES
ACUDID EL 24 DE OCTUBRE

NO A LOS PLANES PRIVADOS DE EMPRESAS

NO A LA BRECHA DE GÉNERO

PENSIÓN MÍNIMA = SMI

NO A LOS CORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO

AUDITORÍA PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

No a la Guerra
 No a la militarización Obligatoria.
 Unidad, Lucha, Dignidad

Musulmanes de Ceuta y Melilla: españoles, pero de segunda



Paso fronterizo

En Ceuta y Melilla, los porcentajes de población musulmana se sitúan aproximadamente entre el 40% y el 50% del total de residentes. En Melilla son el 51,2% de los residentes totales, y en Ceuta entre el 40% y el 45% de la población total de la ciudad. Aproximadamente un 85% de ellos tienen la nacionalidad española, que arrancaron con su movilización en 1985, ya que la Ley de Extranjería les excluía.

Españoles, por tanto, pero españoles de segunda, como demuestran las cifras. Veamos lo que sucede con los jóvenes de ambas ciudades. Tanto en Ceuta como en Melilla, la inmensa mayoría de los menores de 25 años son musulmanes, o de origen musulmán. Entre los nombres más frecuentes de los nacidos en Ceuta y Melilla aparecen mayoritariamente nombres de tradición árabe o musulmana. En el caso de Ceuta, suponen el 81,1% de la frecuencia acumulada de los principales nombres analizados, mientras que en Melilla alcanzan el 92,5%. Y Ceuta y Melilla son los territorios más jóvenes de España. La edad media se sitúa en 39,26 años en Ceuta y en 37,66 años en Melilla, cifras muy inferiores a los más de 44 años de media nacional.

Una población juvenil azotada por

el paro. Según los datos del segundo trimestre de 2026 de la Encuesta de Población Activa (EPA), Melilla y

Españoles, por tanto, pero españoles de segunda, como demuestran las cifras

Ceuta registran las tasas de paro juvenil (menores de 25 años) más altas de España, alcanzando un 80,18% en Melilla y un 47,83% en Ceuta, cifras muy superiores a la media nacional,



que es el 23,77%.

En cuanto a la juventud escolarizada, Ceuta y Melilla han obtenido los peores resultados de España en la prueba

PISA, que compara el nivel educativo de los diferentes países de la OCDE. Melilla se ha colocado a la cola del ranking con 405 puntos en Ciencias, superada por los 420 puntos de Ceuta. En esta competencia, España alcanza 477 puntos. En comprensión lectora ninguna de las ciudades autónomas supera la barrera de los 400, quedándose Ceuta en 397 puntos y Melilla en 379.

Los estudiantes españoles obtienen 451 puntos. En Matemáticas, Ceuta ha

obtenido 405 puntos y Melilla 395. El alumnado español ha obtenido 457 puntos en esta disciplina. El 40,9% de los estudiantes de 15

años de Ceuta ha repetido curso y apenas hay alumnos en los niveles más altos de rendimiento.

Según el informe FOESSA, casi el 44% de los menores en Melilla residen en hogares bajo condiciones de exclusión social.

Una minoría opulenta, y una población musulmana con altos niveles de pobreza y exclusión social

Melilla y Ceuta registran los mayores porcentajes de su población total cobrando el IMV en España, rondando el 13% y el 11%-14% de sus habitantes respectivamente. Aunque la legislación de protección de datos y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa impiden a la administración

... en 2024, Melilla alcanzó una tasa de riesgo de pobreza superior al 40%, mientras que la pobreza severa alcanzó más del 20% ...

pública registrar la afiliación religiosa de los ciudadanos, es de público conocimiento que la mayoría de los perceptores de Ceuta y Melilla son de origen musulmán.

Tampoco hay desglose oficial de niveles de renta por religión, pero se puede deducir del nivel de renta por barrios. La población de origen musulmán (aproximadamente el 40% o más de los habitantes en ambas ciudades) reside de forma muy mayoritaria en los barrios de la periferia y el extrarradio (como el Príncipe Alfonso o Benzú en Ceuta, o zonas específicas de la periferia en Melilla). Y sus niveles de renta son muy inferiores a los de los barrios cristianos de ambas ciudades.

Según El Faro de Ceuta, si el centro de Ceuta fuera un municipio, sería el quinto con mayor renta anual media por persona, solo por detrás de Pozuelo de Alarcón, Matadepera, Boadilla del Monte y Sant Just Desvern. Con 22.258 euros de renta media por persona. En la sección 1, en la Gran Vía y alrededores, la cifra se dispara hasta los 28.144 euros por vecino, muy por encima de las mecas de población pudiente de Madrid y Barcelona.

En cambio, al otro lado de la ciudad, en el Príncipe y Benzú, la renta media anual por habitante no pasa de

6.454 euros, pero en muchas secciones censales ni siquiera llega a 5.000. Si el distrito 6 fuera un pueblo estaría por detrás de El Palmar de Troya, Albuñol o Iznalloz, los municipios con los niveles de ingresos más bajos de toda España.

La distancia entre las dos Ceutas se palpa también si el análisis se centra en la renta neta media por hogar, que



en el centro llega a 62.569 euros, casi el triple que en el extrarradio más cercano a la frontera (23.788).

Melilla figura entre los primeros puestos de España en renta bruta media declarada (31.599 €), impulsada por el peso del sector público, funcionarios con complementos de residencia y las bonificaciones fiscales del IRPF.

En contraste, el INE señala que, en 2024, Melilla alcanzó una tasa de riesgo de pobreza superior al 40%, mientras que la pobreza severa alcanzó más del 20%. El 31,9% de la población de la ciudad (unas 27.000 personas) vive en exclusión social. Un 38% de los hogares musulmanes se encuentra en situación de exclusión social.

Datos que muestran el contraste entre una minoría con muy altos niveles de renta, y una población musulmana con altos niveles de pobreza y de exclusión social.

Héctor Lagar

Ante la subida intolerable de los precios

Hace falta una movilización potente para exigir medidas efectivas de control de precios

En el mes de agosto, la inflación ha subido a un 4,3% interanual. Sobre todo por la subida de los combustibles y la electricidad, pero a lo largo del último año las mayores subidas han sido en transporte (+9,5%) y vivienda, electricidad y gas (+6,47%).

La gasolina y el gasoil están a 2 euros el litro, precios que penalizan gravemente a los trabajadores que, ante la falta o el mal funcionamiento de los transportes públicos, tienen que coger su coche cada día para trabajar, para hacer las compras, etc. Hay una guerra en Irán, es cierto, pero además hay una especulación desenfrenada de las petroleras: en el primer trimestre de 2026 los beneficios de Repsol han tenido un aumento del 153,8% interanual.

Además del IPC oficial, está la fuerte carestía de la vivienda, que como dice el Gabinete Económico de CCOO "se come las subidas salariales y no figura en el IPC".

Frente a esta situación, salarios y pensiones no alcanzan. Los convenios registrados tienen una subida media del 3,04% hasta agosto, por debajo del IPC interanual (4,3%) y por debajo de la subida media del IPC de enero a agosto, las pensiones contributivas han subido un 2,7%, el salario mínimo un 3,1%. Es decir, todos los sectores de la clase trabajadora están perdiendo poder adquisitivo.

Ya antes de estas subidas, En España, entre el 30% y el 56% de los hogares experimentaba dificultades para llegar a fin de mes o afrontar gastos imprevistos.

Estas subidas de precios estrangulan aún más la situación económica de las familias trabajadoras.

Es evidente que las tímidas medidas que ha tomado el gobierno sobre los combustibles no han conseguido frenar este ataque al bolsillo de toda la población trabajadora.

Si se quiere combatir a las derechas hay que tomar medidas urgentes y radicales para responder a las necesidades de la mayoría social.

Corresponde a los sindicatos actuar en defensa del poder de compra de salarios y pensiones.

Deben convocar y proponer a todas las fuerzas sociales una movilización generalizada para exigir al gobierno medidas efectivas de control de precios.

Medidas como intervenir el mercado de la vivienda, imponer un tope al precio de los combustibles, crear empresas públicas de distribución y venta de alimentos y productos esenciales, la actualización automática de salarios y pensiones con un IPC real que incluya todos los gastos que tienen las familias trabajadoras.

Redacción de Información Obrera



«Senadores por la Democracia» y la cuestión de la unidad



Palacio del Senado, Madrid

Una iniciativa circula por las redes, bajo el título «Senadoras y Senadores por la Democracia» (<https://senadoresporlademocracia.es/>). En ella, argumentando las matemáticas de la ley electoral, se llama a firmar una petición de candidaturas unitarias para el Senado de toda la izquierda en todas las circunscripciones provinciales, ya que «la división y pugna electoral entre

ellas –las derechas– nos concede una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista».

«Nuestro objetivo –añaden– es que las próximas elecciones generales renueven la posibilidad de una coalición progresista» [...] «un nuevo acuerdo de gobierno progresista que continúe, mejore y profundice la labor desarrollada por los últimos gobiernos de coalición».

Llamar a la unidad para vencer a las derechas... no va a conseguir la movilización electoral que se necesita.

¿Un gobierno que continúe el aumento del gasto militar, la no derogación de la Ley Mordaza, la inacción ante el gravísimo problema de la vivienda, el mirar para otro lado mientras la subida de los carburantes y de los precios en general se comen todas las subidas de salario y pensiones, la no derogación de las reformas laborales que abarataron y facilitaron el despido de miles de trabajadores y trabajadoras?

Nos dice el texto promotor de la iniciativa que «en el Senado se eligen personas y los programas electorales tienen menos relevancia». Tal vez por eso, el texto no adelanta ni una sola propuesta política que sustente esas candidaturas conjuntas. Pero, precisamente, derrotar a las derechas exige proponer un programa político que haga que, para la gran masa de abstencionistas que pertenecen a las clases trabajadoras, se haga atractivo ir a votar. Si, como

dice el llamamiento, «el objetivo final de la propuesta Senadores por la Democracia es ilusionar y activar a la ciudadanía», haría falta un programa claro de defensa de salarios y pensiones, de defensa de los servicios públicos que están siendo destruidos, mientras el dinero que necesitan se desvía al gasto militar, de intervención en el mercado de la vivienda, de control de los precios... Es decir, un programa distinto del del gobierno que se dice progresista.

Ahí están los ejemplos de Mamdani en Nueva York y de Berlín. Y de las derrotas de Sajonia y Mecklemburgo.

Llamar a la unidad para vencer a las derechas, para apoyar al gobierno cuya política es la que abre paso al rechazo de la gente y al crecimiento de la ultraderecha, eso no va a conseguir la movilización electoral que se necesita.

Ahí están los ejemplos de Mamdani en Nueva York y de Berlín. Y de las derrotas de Sajonia y Mecklemburgo.

H.L.

El nudo gordiano de la unidad de la izquierda

Actualmente nos encontramos ante dos propuestas para forjar la unidad de la izquierda, la señalada de forma intensa, y que ha ido perdiendo fuelle, por Gabriel Rufián y la planteada la semana pasada por Irene Montero y apoyada en principio por Antonio Maíllo.

Cada una de las propuestas se vertebran sobre diferentes mecanismos y lo que ambas persiguen es reforzar electoralmente la presencia de diputados en el Parlamento. En línea con los intereses de un PSOE (el de Pedro Sánchez) consciente de que necesitaría un amplio bloque a su izquierda para repetir un gobierno «progresista».

La propuesta de Rufián se ciñe al rédito que se podría obtener ante el actual sistema electoral, con un claro mecanicismo: sumemos nuestros votos para conseguir los escaños residuales que se pierden. Dando por hecho que al aparecer unidos mantendrían, si no ampliarían, los votos de las organizaciones que componen esa unidad. Para facilitar esta estrategia matemática, que no política, se plantea una plataforma amplia, plurinacional, organizada provincialmente y sin renunciar a las siglas. Su objetivo es simple: parar a la derecha y extrema derecha y ofrecer un apoyo condicionado al PSOE de Pedro Sánchez.

Finiquitada la propuesta de un amplio acuerdo organizativo, como era la propuesta de Sumar, ha sido Irene Montero la encargada de plantear otro tipo de unidad, la de proponer a la ciudadanía los candidatos en unas primarias abiertas.

Pero ni estamos en febrero del 36 cuando fue posible un frente popular (en una recién nacida República que ya había sufrido una enorme represión tras el bienio negro de la CEDA y la Revolución de Asturias) que, bajo una única reivin-



Asamblea para la unidad de la izquierda

dicación fundamental, la de amnistiar los presos políticos y revolucionarios asturianos fue suficiente para derrotar electoralmente a la derecha. Ni las condiciones de La Francia Insumisa (movimiento anhelado por los dirigentes de izquierda españoles) son idénticas a las de aquí. No hay dirigentes carismáticos, no hay organización centralizada y, sobre todo, no existe entre las fuerzas políticas un único objetivo como sería el de acabar con la Monarquía, como sí plantea Mélenchon dirigente de LFI cuyo objetivo es enterrar la V República por ser incompatible con las aspiraciones del pueblo francés.

Tratar de seguir gestionando las migajas en este régimen monárquico no da para la unidad. Hay poco para repartir. Y, sobre todo, y cada vez más, la denominada desafección que permite avanzar a la derecha y la extrema derecha, y que se encargan ellos mismos de alimentar, no se va a frenar a base de miedo. Solo un giro del Gobierno a la izquierda y el cumplimiento de aquello por lo que les votaron, es decir las reivindicaciones de la clase trabajadora, puede frenar en seco a la derecha. La «paz, casa y trabajo» de Irene, aunque lo

parezca no es la «paz, pan y tierra» de Lenin, entre otras cosas porque tras Lenin millones de trabajadores se estaban organizando, no para gestionar migajas, sino para la toma del poder y acabar definitivamente con el régimen zarista y el gobierno provisional.

Sin acabar con este régimen corrupto y corruptor ni habrá paz (porque sus beneficios están centrados ahora en la guerra) ni habrá casa (porque es intrínseco a la propiedad privada) ni trabajo (se enriquecen con la plusvalía).

La unidad de la izquierda solo es posible con un acuerdo sólido en defensa de las reivindicaciones más básicas y no se puede esconder, como se pretende, que son incompatibles con el régimen monárquico, sus leyes, su poder judicial y todas y cada una de sus instituciones. Cuenta la leyenda que Alejandro Magno al no poder desenredar el nudo gordiano, lo cortó de un tajo con su espada. La unidad de la izquierda solo es posible bajo el objetivo de alcanzar las reivindicaciones y eso pasa por acabar con este régimen.

Pere Centelles

Palestina bien vale la unidad

Desde junio de este año 2026, en la Conferencia Internacional de Londres, la lucha por unir en tiempo y de manera organizada a todos aquellos que luchamos por defender Palestina, empezando por parar el genocidio, es encarnizada y es evidente que está teniendo sus frutos en número de ciudadanos activos que se suman a la jornada del 10 de octubre, pero para seguir sumando fuerzas y derrotar al imperialismo es cada día más evidente que hay que desbrozar las dificultades.

En el País Vasco, Euskal Herria en euskera, la situación se complica, aunque en el resto del Estado español las cosas no sean fáciles: a la convocatoria de RESCOP para los días 3-4 se suma la convocatoria de un organismo denominado Palestinaren Elkartasuna, que convoca el día 3 en Bilbao y otra más de otro organismo denominada Gernika-Palestina que convoca el día 8 ante los ayuntamientos.

Mientras el apoyo y las simpatías por Palestina no solo es masivo (hasta ciertos sectores conocidos por sus simpatías con Israel se sitúan contra el genocidio) el asombro y la incredulidad son mayúsculos. Así pues, la Comisión Abierta contra la Guerra/Gerraren Aurka, surgió tras la Conferencia Internacional de Londres para aplicar los acuerdos en la que participamos activistas de distintas organizaciones e independientes, estamos debatiendo la idea de convocar un acto el mismo día 10 con tres objetivos:

1. Saludar la jornada internacional y animar a reforzar la vía de la unidad y movilización mundial contra el genocidio, ya que ninguna de las convocatorias anunciadas nombran siquiera esta jornada.
2. Hacer todo lo posible para atraer a la mesa del acto a todos aquellos que dicen luchar contra el genocidio.
3. A partir de él abrir un diálogo fraternal que permita una unidad de acción en adelante y frenar un posible descenso de la movilización si la división se mantiene.

Mikel González
Comisión Abierta contra la Guerra/Gerraren Aurka

INFORMACIÓN OBRERA

Tribuna libre de la lucha de clases

Información Obrera busca, con el intercambio de noticias, propuestas y opiniones, ayudar a la lucha de los trabajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las instituciones del capital.

Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, contra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes soberanas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco republicano que libremente decidan.

Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instrumento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente independiente del Estado, patronal e instituciones internacionales del capital.

Ayudar a resolver la crisis de representación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.

Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, militantes del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.

Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del movimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.

Forma parte del Acuerdo Internacional de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y militantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la clase obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus organizaciones contra los planes de la Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.

• Información Obrera, tribuna libre de la lucha de clases se responsabiliza únicamente de los editoriales, los comunicados o declaraciones del comité de redacción así como de las notas o artículos sin firma. Los artículos firmados individualmente o por colectivos, son responsabilidad de sus autores y no tienen que coincidir necesariamente con la posición del comité de redacción.

COMITÉ DE REDACCIÓN

Xabier Arrizabal, Isabel Cerdá, Manuel Cuso, Juan Miguel Fernández, José Gallego, Mikel González, Blas Ortega, Josep Antoni Pozo, Ángel Tubau.

C/ DESEÑAÑO 12, 1º3A 28004 MADRID
91 522 23 56 TLF-FAX: 91 521 72 01

io@informacionobrera.org

www.informacionobrera.org

Otros artículos en nuestra página WEB

Los borrados de la historia: millones de hombres ucranianos huyen de un cruel sistema de reclutamiento

<https://informacionobrera.org/los-borrados-de-la-historia-millones-de-hombres-ucranianos-huyen-de-un-cruel-sistema-de-reclutamiento/>

Entrevistamos a Asier Cuesta, coordinador General de AEEP-PV y activista cultural (En valenciano)

<https://informacionobrera.org/entrevistamos-a-asier-cuesta-coordinador-general-de-aEEP-pv-y-activista-cultural/>

Recuerdo y homenaje



Nos ha dejado nuestro querido compañero y amigo José Antonio Vázquez de Castro, al que conocimos por su apodo de tiempos del

franquismo “Pulanzas” (por Nicos Poulantzas). Fiel a los principios de la IV Internacional desde su juventud universitaria, militante de la Liga Comunista y del POSI, dedicó su vida profesional a la documentación histórica trabajando en RTVE hasta su jubilación. Sus conocimientos políticos e históricos sorprendían por su rigor y profundidad. Toda su vida se ha caracterizado por una curiosidad sin límites. Su compromiso de clase permanente le llevó a colaborar en campañas e iniciativas, además de la actividad sindical como miembro de UGT en su sector. Durante años

colaboró como traductor de los artículos que publicamos en *La Verdad*, nuestra revista teórica de la IV Internacional. Todos nosotros le recordamos por sus brillantes y documentadas intervenciones en los numerosos actos a los que asistía, haciendo gala de una inmensa cultura. Los que gozábamos de su amistad siempre recordaremos su bonhomía, su capacidad de discusión con un gran respeto hacia sus interlocutores.

Queremos manifestar nuestro pesar a todos aquellos que le conocieron, y particularmente a su familia y amigos.

La economía de guerra en Estados Unidos: El engranaje destructor del capital (1.ª parte)

Dossier realizado por **Maxime Champion**

1 ¿Por qué impulsa el capital la economía de guerra?

A pesar de los miles de millones de beneficios acumulados, el capital está en crisis. Las necesidades de la población pueden ser inmensas, pero solo constituyen un mercado si su satisfacción reporta suficientes beneficios. Por lo tanto, puede haber escasez de viviendas, hospitales o transporte, mientras que hay grandes cantidades de dinero buscando dónde invertirse.

Los capitales acumulados son demasiado elevados en comparación con las posibilidades de inversión suficientemente rentables. Es precisamente esta dificultad para hacerlos fructificar lo que constituye la crisis de valorización del capital. La abundancia de beneficios no es una contradicción: una vez acumulados, deben a su vez encontrar dónde invertirse con una rentabilidad suficiente. El armamento ofrece una salida a estos capitales: los Estados financian una demanda que no depende directamente del poder adquisitivo de la población.



En esta crisis, el imperialismo estadounidense se apoya en su poderío militar para defender las posiciones económicas y estratégicas de las que se benefician los grandes grupos estadounidenses. El gasto en armamento sirve, por tanto, tanto para abrir mercados al capital y para dotarlo de los medios necesarios para preservar su dominio. Cuando estalla la guerra, las armas consumidas deben ser sustituidas: la destrucción genera nuevos pedidos.

Esta política se mantiene a lo largo de las presidencias estadounidenses. Obama había iniciado el reajuste estratégico hacia Asia y Trump situó

la rivalidad con China en primer plano. Tras la invasión rusa de Ucrania, Biden aceleró los pedidos y las inversiones industriales. En octubre de 2023, para defender los créditos militares destinados a Ucrania e Israel, explicaba que ese dinero permitía «reconstituir nuestras propias reservas con nuevos equipos».

De vuelta en la Casa Blanca, Trump quiere elevar el gasto en defensa a 1,5 billones de dólares para 2027, frente a los aproximadamente 1 billón previstos para 2026 según la Casa Blanca. El Estado busca así ampliar aún más el mercado de armamento y las capacidades de producción que lo alimentan. Esta carrera desenfrenada abre nuevas oportunidades al capital, al destinar cada vez más riqueza a la preparación y la conducción de las guerras.

2 ¿Cómo hace el Estado aumentar la producción de armas?

Para transformar los presupuestos militares en producción, se necesitan máquinas, naves industriales, trabajadores cualificados, proveedores... Mientras que los industriales quieren



período tan prolongado, el Estado permite a la empresa planificar la ampliación de su producción.

En el caso de los proyectiles de 155 mm, una de las principales municiones de artillería utilizadas en Ucrania, la producción estadounidense ha pasado de unas 14 000 unidades al mes antes de 2022 a 36 000 en marzo de 2026, según las cifras publicadas en julio.

El camino hacia la economía de guerra está bien encaminado: los créditos y los pedidos se traducen en un aumento real de la producción.

3 ¿A quién beneficia esta política del dinero público?

Los primeros beneficiarios son los grupos que obtienen los pedidos: RTX, matriz de Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman o incluso General Dynamics. El Estado financia parte de sus inversiones, en particular mediante deuda pública, y compra su producción.

Entre los accionistas de estos grupos se encuentran grandes gestores financieros que invierten el dinero de sus fondos y de sus clientes. A finales de 2025, las carteras gestionadas por Vanguard poseían el 9,3% de RTX, las de BlackRock el 7,8% y las de State Street el 6,8%, lo que supone casi una cuarta parte del capital entre los tres². Estos mismos gestores invierten así capital en armamento, petróleo o títulos de deuda pública: en todos los casos, buscan obtener una rentabilidad.

Los dividendos alimentan los ingresos de los fondos y de sus clientes, mientras que los gestores perciben comisiones. «¿Por qué plantearse una exposición al sector de la defensa?»,

pregunta, por cierto, BlackRock en su página web, destacando el aumento del gasto militar de los gobiernos.

A través de sus encargos, el Estado abre salidas a todo un conjunto de capitales, tanto industriales como financieros, cuyos ingresos dependen en parte de la continuidad del gasto militar. A través de este mecanismo, numerosos capitalistas se interesan por la economía de guerra.

Pero la crisis del imperialismo estadounidense se manifiesta incluso en su industria armamentística: las exigencias de rentabilidad entran en conflicto con las del rearme. En 2025, Lockheed Martin destinó 6.100 millones de dólares a dividendos y recompras de acciones, frente a los 3.600 millones destinados a inversiones en material y tecnología de la información, así como a investigación y desarrollo autofinanciados³.

El 7 de enero de 2026, Trump firmó un decreto destinado a restringir los pagos a los accionistas de aquellas empresas que entregan con demasiada lentitud o invierten de forma insuficiente.

4 ¿Cómo se implica el capital mundial en la carrera armamentística?

La búsqueda de mercados rentables empuja a los capitales a la carrera armamentística más allá de Estados Unidos. Los Estados europeos también apoyan a «sus» grupos industriales mediante pedidos militares. Presentado en marzo de 2025, el plan «ReArm Europe» tiene como objetivo movilizar hasta 800.000 millones de euros en gasto adicional, gracias a la flexibilización de las normas presupuestarias nacionales y a los presta-

mos europeos. Se aplica la misma lógica: comprometer las finanzas públicas para abrir mercados al capital.

En esta dinámica mundial, el imperialismo estadounidense pretende utilizar su posición dominante para hacerse con una parte de los pedidos extranjeros. El decreto de Trump del 6 de febrero de 2026 establece explícitamente el objetivo de utilizar «las compras y los capitales extranjeros para desarrollar la producción y las capacidades estadounidenses». Entre 2021 y 2025, Estados Unidos ya ha suministrado el 58% del volumen de las principales importaciones de armas de los países europeos de la OTAN.

Los grupos europeos también quieren beneficiarse del aumento de los presupuestos militares. El programa europeo SAFE, dotado con 150.000 millones de euros y incluido en los 800.000 millones anunciados, exige que al menos el 65% del coste de los componentes de las armas adquiridas proceda de la UE, de Ucrania o de los países europeos asociados que cumplan los requisitos.

Los capitales participan en la misma carrera por los mercados militares, al tiempo que se disputan los pedidos, pero el imperialismo dominante puede orientar esta carrera en su beneficio. En todas partes, se movilizan los recursos públicos para respaldar los beneficios y preparar nuevos desastres.

1. RTX, comunicado de prensa del 17 de agosto de 2026.

2. RTX, documento para los accionistas de 2026, p. 36.

3. Lockheed Martin, Resultados de 2025, 29 de enero de 2026.

Trump decide enviar más bombas a Israel

(Leído en *Informations ouvrières* n.º 928)



El Programa de Financiación Militar Extranjera (FMF) es el que gestiona la ayuda militar estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales concedida a Israel, en el marco de un memorán-

dum de entendimiento firmado bajo el mandato de Obama en 2016 y vigente hasta 2028. La financiación se lleva a cabo según el siguiente procedimiento: Estados Unidos transfiere este di-

nero a Israel, que lo utiliza para comprar armas estadounidenses.

Todo ello con el dinero de los contribuyentes estadounidenses. En la práctica, se trata de una subvención a la industria armamentística estadounidense. Por ejemplo, el contrato de 2.800 millones de dólares en bombas MK-84/BLU-117 acaba en gran parte en las arcas de General Dynamics, mientras que los 3.800 millones de dólares en helicópteros Apache anunciados en enero de 2026 van a parar a las arcas de Boeing y Lockheed Martin. Este anuncio se produce cuando el alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 sigue oficialmente vigente, y las operaciones militares israelíes han causado más de 1.300 muertos desde esa fecha, principalmente gracias a las armas estadounidenses.

Corresponsal

Cuando la catástrofe de Gaza llega hasta los grifos israelíes

Israel ha destruido o dañado el 90% de las infraestructuras de agua y saneamiento de la Franja de Gaza, según MSF, lo que ha creado un entorno ideal para las ratas, hasta el punto de que ya se han registrado en Gaza 17.000 casos de infecciones relacionadas con roedores y ectoparásitos desde principios de año. Según la prensa israelí, las ratas han comenzado a invadir los kibutz cercanos a Gaza.

Las infraestructuras destruidas en Gaza tienen consecuencias en la calidad del agua que se distribuye en el Estado de Israel. Según un informe encargado por investigadores israelíes, el principal riesgo identificado para Israel es la contaminación del agua de mar, los ríos, las playas y los embalses de agua potable, debido al tratamiento deficiente de las aguas residuales en

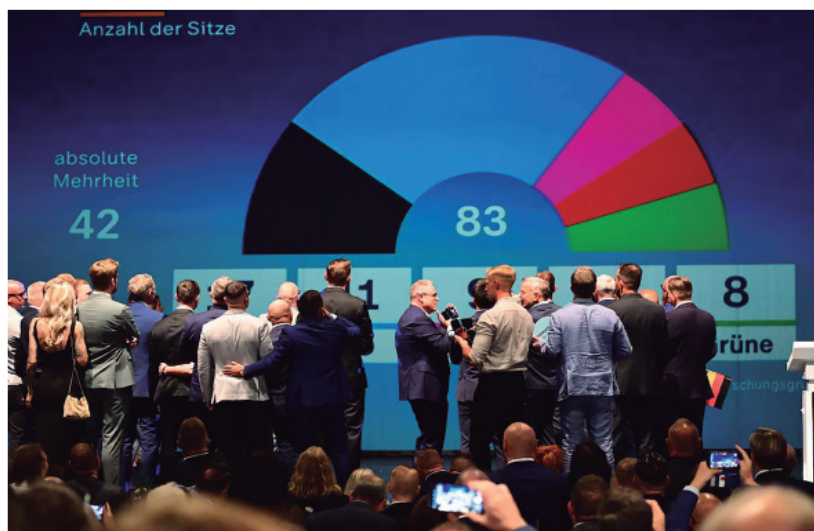


Gaza, que, además de provocar enfermedades que padecen cientos de miles de habitantes de Gaza, se extienden a lo largo de la costa israelí. Las autoridades israelíes se han visto obligadas a cerrar varias plantas desalinizadoras de agua de mar, obstruidas por la llegada de una mezcla de algas y residuos procedentes de Gaza.

Corresponsal

Alemania – tras las elecciones en tres länder

Entrevista a Gotthard Krupp, sindicalista de Ver.di, miembro de la redacción del periódico *Soziale Politik&Demokratie* (Política Social & Democracia) (Entrevista realizada el 22 de Septiembre)



«¡Masivo rechazo al gobierno Merz, a su política belicista y al desmantelamiento social!»

Se han celebrado elecciones en tres regiones (Länder): Sajonia-Anhalt (el 6 de septiembre), Mecklemburgo-Pomerania Occidental y Berlín (el 20 de septiembre). ¿Qué caracteriza a estas elecciones?

Numerosos medios de comunicación, tanto en Alemania como en el extranjero, destacan el impacto que supone para Alemania el histórico avance de la AfD, partido de extrema derecha. El presidente estadounidense Trump y Musk felicitan a la AfD por su victoria electoral («Luchad por un futuro radiante para Alemania»). Pero esto no debe hacernos olvidar que la AfD se aprovecha, ante todo, de la ira y la desesperación ante la amenaza de declive social que se cierne sobre amplios sectores de la población, de la que es responsable la política del Gobierno de Merz-Klingbeil¹.

En Berlín, antiguo bastión del SPD, este partido ha registrado su peor resultado electoral desde la reunificación de 1990. La CDU sufre allí un colapso. En

Mecklemburgo-Pomerania Occidental, incluso queda excluida del Landtag (el Parlamento regional, Ndt), mientras que el SPD cede allí su primer puesto a la AfD.

Esto es lo que se desprende claramente de todos estos resultados electorales: la política belicista, socialmente destructiva y antidemocrática del Gobierno de Merz-Klingbeil ha sido rechazada por los votantes.

¿Qué significa la victoria de Die Linke en Berlín?

Se trata de un caso particular, la situación es compleja. El rechazo al Gobierno de Merz se manifiesta sobre todo a través de los votos de protesta a favor de la AfD. En Sajonia-Anhalt, el BSW también ha sido elegido para el Parlamento regional (Landtag), principalmente como partido antiguerra. Die Linke perdió votos allí debido a su anuncio de que también apoyaría un gobierno de la CDU. En Berlín, Die Linke logró obtener un gran número

de votos de protesta gracias a su ofensiva contra el Senado de la CDU/SPD.

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno federal ante este rechazo popular?

Ya el domingo por la noche (20 de septiembre), incluso antes de que se anunciaran los resultados oficiales de las elecciones en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Merz declaró que no modificaría en absoluto sus «reformas», es decir, los drásticos recortes en el sistema sanitario, el sistema de pensiones... Y que mantendría la coalición con el SPD, que cuenta con el apoyo total de los dirigentes sindicales.

Sin embargo, parece que, bajo la presión de una resistencia popular cada vez mayor —que se manifiesta no solo en las elecciones, sino también a través de numerosas huelgas y manifestaciones—, se están barajando ligeras correcciones a los peores ataques sociales con el fin de salvar la coalición.

También conviene precisar que la militarización y la carrera armamentística continúan de forma cada vez más intensa en el marco de los preparativos de guerra². La mayoría de la población rechaza esta política belicista, tal y como, por otra parte, han confirmado los resultados de las elecciones. Aunque la AfD apoya la política de rearme y militarización del Gobierno de Merz y también aprueba la guerra librada por Estados Unidos y Netanyahu, se presenta como un «partido de paz».

¿Has hablado de la resistencia y de las huelgas de los trabajadores?

Sí, y también de las de los jóvenes. El 25 de septiembre, miles de personas se movilizarán de nuevo con motivo de la huelga de los estudiantes de secundaria contra el servicio militar obligatorio.

Ayer, 21 de septiembre, tuvo lugar la jornada de acción nacional de IG Metall

(el sindicato metalúrgico, N. del T.) en el sector del automóvil. En más de 280 localidades de toda Alemania, unos 175.000 trabajadores de la industria automovilística y sus subcontratistas se manifestaron contra la destrucción de empleo y los cierres de fábricas en el sector del automóvil.

Esto supone también un «no» rotundo a



Gotthard Krupp

la política del Gobierno federal, contra la desindustrialización y la reorientación de la economía hacia la producción bélica.

El próximo sábado, 26 de septiembre, tendrá lugar una jornada de acción nacional de todos los sindicatos afiliados a la DGB (la central sindical alemana, Ndt) en quince ciudades contra la destrucción del estado del bienestar. Se espera una amplísima movilización.

Y el 3 de octubre, el movimiento por la paz convoca manifestaciones en Berlín y Stuttgart. Pero hay un problema fundamental: Alemania carece de un partido obrero.

¿A qué te refieres con eso?

El SPD ya no es un partido obrero, como demuestran las elecciones, cuando los

trabajadores, por ira y a modo de protesta, votan a la AfD. Die Linke no quiere en absoluto ser un partido obrero. La AfD es hostil hacia los trabajadores y es un partido belicista.

Dentro del BSW se está llevando a cabo un debate serio sobre la necesidad de que este partido se convierta en un partido obrero. Por eso lucha la AGBSW, portavoz de los sindicalistas dentro del BSW.

Es necesario luchar para levantar una fuerza política, un partido que defienda el estado del bienestar e impida la guerra. ¡Por un «estado del bienestar en lugar de un estado belicista»!

(1) Friedrich Merz es el canciller (primer ministro) de Alemania, líder del partido democristiano CDU. Lars Klingbeil es el vicecanciller del SPD y ministro de Hacienda, N. del trad.

(2) Alemania tiene previsto, por ejemplo, adquirir misiles de crucero Tomahawk estadounidenses. Estos tienen un alcance de más de 1.800 kilómetros (Moscú se encuentra a 1.600 kilómetros en línea recta de Berlín).

“LOS RICOS QUIEREN LA GUERRA, LA JUVENTUD, UN FUTURO!”



Huelga y manifestaciones juveniles en toda Alemania el 25 de septiembre contra la militarización y la guerra, como preparación para la nueva jornada internacional del 20 contra el servicio militar obligatorio

En la cumbre de la ONU, los belicistas en campaña

Por Lucien Gauthier



La escalada bélica se intensifica. Los bombardeos se recrudecen por ambos bandos. Con el pretexto de un hipotético dron ruso sobrevolando el territorio lituano, se ha decretado el estado de emergencia y se ha cerrado el aeropuerto de Vilna. En Polonia, las sirenas suenan con regularidad. En la cumbre de la ONU, el 21 de septiembre, Macron se reunió con Trump para que «ayudara» a Ucrania, y luego se reunió con Zelenski, instándole a la escalada.

Este fin de semana, Ucrania ha enviado un enorme número de drones a la región de Moscú, atacando edificios civiles y matando a sus habitantes.

Putín anunció que, en respuesta, intensificaría los ataques en Ucrania.

El objetivo de Zelenski era perturbar las elecciones legislativas en Rusia. Según la prensa, la participación en estas elecciones fue muy elevada y el resultado, que se daba por hecho de antemano, supuso el triunfo del partido de Putin.

Este último se había encargado de excluir del proceso electoral las voces de una oposición, por tímida que fuera, que pedía el fin de la guerra. Debido al rumor de que el régimen iba a llevar a cabo una nueva movilización para la guerra, decenas de miles de rusos han

huido de su país hacia Georgia y Armenia. Las desercciones se multiplican en Ucrania. La Unión Europea ha decidido prohibir la entrada en su territorio a los desertores rusos y a los ucranianos que no hayan cumplido con sus obligaciones militares.

Los dirigentes occidentales se sirven de la guerra en Ucrania para militarizar su sociedad y permitir que la industria armamentística obtenga beneficios considerables.

Este ambiente belicista, creado deliberadamente, tiene como objetivo, bajo el pretexto de la «unión nacional», destruir todo lo que los trabajadores han conseguido en las últimas décadas. El Gobierno de Lecornu no es una excepción: anuncia un presupuesto de 54 000 millones en «ahorros», mientras que ha aumentado el presupuesto militar en 36 000 millones en cinco años y se destinan miles de millones al régimen oligárquico y mafioso de Zelenski. Frente a los belicistas de la derecha, la izquierda y la extrema izquierda, seguimos insistiendo: basta ya de masacres, alto el fuego inmediato, apertura de las fronteras de la Unión Europea a los desertores rusos y ucranianos, a quienes se les debe conceder asilo político y el estatuto de refugiado.

Ultima Hora



Un migrante acaba de resultar herido de bala durante una operación del ICE mientras circulaba en coche por Austin, capital de Texas.

Encarcelado nada más salir del hospital, donde el ICE prohibió a su mujer visitarlo, se enfrenta a la amenaza de expulsión. Según el recuento del New York Times, desde el regreso de Trump al poder, más de veinte personas han recibido dispa-

ros de la ICE, la mayoría de ellas mientras circulaban en coche, y seis de ellas han fallecido.

La situación ha alcanzado tales proporciones que incluso una diputada republicana de una circunscripción de Florida con una amplia mayoría latina acaba de difundir un anuncio electoral en el que critica la política migratoria de Trump.

Corresponsal

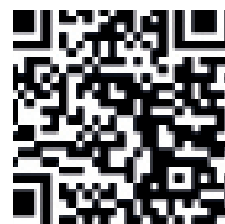
Me abono a
INFORMACIÓN OBRERA

NOMBRE Y APELLIDOS: DIRECCIÓN:

CODIGO POSTAL: POBLACIÓN: TELÉFONO: FECHA:

INGRESOS EN LA C/CORRIENTE - LA CAIXA ES83 2100 2865 5813 0063 0460

6 NÚMEROS: 9 € ☐
 12 NÚMEROS: 18 € ☐
 24 NÚMEROS: 36 € ☐
 PDF, 24 NÚMEROS: 15 € ☐



www.informacionobrero.org